



Esclavismo Mexicano

Un Estado de Indefensión e
Incertidumbre Jurídica



Luis Miguel Zavala López

ESCLAVISMO MEXICANO: UN ESTADO DE INDEFENSIÓN E
INCERTIDUMBRE JURÍDICA

Primera edición
Mayo de 2018

© Derechos reservados conforme a la Ley,
por el Autor Luis Miguel Zavala López
San Miguel de Allende, Gto., México.

Prohibida la reproducción total o parcial
de esta obra por cualquier medio, sin
autorización escrita del Autor.

ISBN:
978-84-17211-87-5

CONTIENE INFORMACION PUBLICADA HASTA EL 29 DE ENERO DE 2018
LOS COMENTARIOS Y EJEMPLOS EXPUESTOS EN ESTA OBRA
SON RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.

ACERCA DEL AUTOR

Es Contador Público en ejercicio en el sector empresarial; ha ejercido la profesión por más de 20 años; es Expresidente del Colegio de Contadores Públicos de San Miguel de Allende, A.C.; Miembro de la Asociación Interamericana de Contabilidad; miembro de la Asociación Nacional de Fiscalistas, A.C.; ha escrito diversos artículos en revistas y páginas de internet; ha sido profesor a nivel Universitario en materias contables, legales y de auditoría; expositor en temas fiscales y contables; múltiples diplomados en materia fiscal y de comercio exterior; Licenciatura en Contaduría por la Universidad de Guanajuato; ha llevado a cabo estudios de postgrado en materia Fiscal en la Universidad de Guanajuato, autor-editor registrado ante el Padrón Nacional de Editores del Instituto Nacional de Derechos de Autor.

ESCLAVISMO MEXICANO: UN ESTADO DE INDEFENSIÓN E INCERTIDUMBRE JURÍDICA

DEDICATORIA

A Dios, a mi esposa María Luisa y a mi familia, por darle sentido a mi vida.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

ABREVIATURAS

CAPÍTULO I. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

| | |
|---------------------------------|----|
| 1. Objetivo | 10 |
| 2. Planteamiento del problema | 10 |
| 3. Preguntas de investigación | 11 |
| 4. Metodología y procedimientos | 11 |

CAPÍTULO II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

| | |
|--------------------------------|----|
| 1. Estado | 12 |
| 1.1 Definición | 12 |
| 1.2 Orígenes e historia | 13 |
| 1.2.1 Asia oriental | 13 |
| 1.2.2 Antiguo oriente | 13 |
| 1.2.3 Grecia | 14 |
| 1.2.4 Roma | 14 |
| 1.2.5 Edad media | 15 |
| 1.2.6 Estado moderno | 15 |
| 1.3 Diferentes tipos de Estado | 18 |
| 2. La Administración Pública | 20 |
| 2.1 Definición | 20 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.2 Orígenes e historia | 21 |
| 2.3 Diferentes tipos de Administración Pública | 22 |
| 2.3.1 La administración pública en la cultura anglosajona [Capitalista] | 22 |
| 2.3.2 La administración pública en los países socialistas | 23 |
| 3 El Estado Mexicano | 24 |
| 3.1 Generalidades e historia | 24 |
| 4 Soluciones se han planteado a lo largo del tiempo | 26 |
| 4.1 La configuración del Estado interventor en México | 26 |
| 4.2 El modelo económico neoliberal | 27 |
| 5 Federalismo | 29 |
| 5.1 Definición y concepto | 29 |
| 5.2 Federalismo en México | 30 |
| CAPÍTULO III. HECHOS VIOLATORIOS INVESTIGADOS | |
| 1 Situación actual | 34 |
| 1.1 Múltiples referencias | 34 |
| CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE AGRAVIOS Y EVIDENCIAS | |
| 1. Discusión | 86 |
| 1.1. Estado | 86 |
| 1.2. Administración pública | 88 |

ESCLAVISMO MEXICANO: UN ESTADO DE INDEFENSIÓN E INCERTIDUMBRE JURÍDICA

| | |
|--------------------------------------------------|----|
| 1.3. Principio de legalidad | 89 |
| 1.4. Incertidumbre | 90 |
| 1.5. Informalidad y la falta de pago del tributo | 91 |
| 1.6. Obligación de informar | 93 |
| 1.7. Imposibilidad práctica | 94 |
| 1.8. Soberanía del pueblo | 96 |
| 1.9. Criterios de los tribunales | 98 |
| 1.10 Neopunitivismo y exceso de regulaciones | |

101

| | |
|--------------------------------------------------------|-----|
| CAPÍTULO V. ANÁLISIS FINAL Y CONCLUSIONES DEL AUTOR | 104 |
| REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 111 |

INTRODUCCIÓN

“La frase Injusto pero legal, es el primer paso al esclavismo. Porque lo justo da vida a lo legal, lo legal no puede dar muerte a lo justo. Si lo legal da muerte a lo justo, está dando muerte a sí mismo.”

Luis Miguel Zavala López

El objetivo del presente trabajo es hacer notar el estado de indefensión e incertidumbre jurídica por el que el gobernado atraviesa en México, con enfoque principalmente tributario, originado tanto por el exceso de autoridad de la administración pública, así como por el distanciamiento que existe entre las funciones que actualmente lleva a cabo y aquellas que realmente debería estar haciendo, y por las cuáles, en sus orígenes, fue creado.

El pago del tributo por naturaleza humana no es completamente aceptado y toda reducción al mismo, incluso su propia eliminación, genera una satisfacción a quien tiene la carga, sin embargo, la razón del estudio no es la eliminación del mismo, sino más bien, buscar el equilibrio con la justicia, la proporcionalidad y la equidad que literalmente mandata la constitución política y la doctrina misma.

Para dar alcance a lo referenciado, se iniciará con la identificación plena del objetivo fundamental teleológico que recae en el Estado, para lo cual fue creado, utilizando doctrina,

historia y legislación, tanto nacional como extranjera, para, al final del documento, emitir una conclusión final fundamentada focalizando los sesgos que el actuar de la administración pública ha tenido.

ABREVIATURAS

| | |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| LISR | Ley del Impuesto Sobre la Renta |
| LIVA | Ley del Impuesto al Valor Agregado |
| CFF | Código Fiscal de la Federación |
| CPEUM | Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos |
| SAT | Servicios de Administración Tributaria |
| SHCP | Secretaría de Hacienda y Crédito Público |
| PRODECON | Procuraduría de la Defensa del Contribuyente |
| OCDE | Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico |
| RAE | Real Academia de la Lengua Española |
| TLC | Tratado de Libre Comercio |

ESCLAVISMO MEXICANO: UN ESTADO DE INDEFENSIÓN E INCERTIDUMBRE JURÍDICA

| | |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NOM | Norma Oficial Mexicana |
| DOF | Diario Oficial de la Federación |
| REDALYC | La Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal |
| APRI | Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones |
| ALADI | Asociación Latinoamericana de Integración |
| INFONAVIT | Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores |

CAPÍTULO I

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1. Objetivo

Este artículo tiene por objetivo analizar la legislación y regulaciones aplicables a la república mexicana, mayormente con enfoque tributario, así como de la determinación de la verdadera razón de existir del Estado y las funciones que el mismo debe estar ejecutando, lo anterior con la finalidad de comprobar que el gobernado está siendo sujeto a un exceso de autoridad que le conlleva a una imposibilidad de ejercer sus derechos con equidad, proporcionalidad y la amplitud que la constitución le confiere, violentando los principios fundamentales de la relación jurídica y disminuyendo la máxima soberanía que en él debería recaer.

2. Planteamiento del problema y justificación

A partir de las reformas del Estado en materia fiscal y presupuestaria aplicable a los últimos años, resaltando entre ellas la del 2014, se ha acentuado la fiscalización y tendencia recaudatoria de la administración pública y con ello el desencadenamiento de litigios interpuestos por el gobernado tratando de buscar protección ante el poder judicial y los demás entes existentes encargados de garantizar la justicia. La disminución de ingresos petroleros es una de las principales razones que ha originado esta tendencia. Las agravantes interpuestas por el ciudadano en los litigios van desde temas procesales simples, hasta argumentos sobre violaciones de los

principios fundamentales básicos constitucionales, siendo el último el que representa mayor importancia.

3. Preguntas de investigación

¿Es la Administración pública mexicana actual coincidente con lo que teleológicamente debería de ser?

¿Está el Estado mexicano procurando el bienestar de su población de la manera equitativa y proporcional que señala la carta magna?

¿Está la forma de gobierno mexicana y su normatividad permitiendo al Pueblo ejercer la soberanía y federalismo señalados en el artículo 39 y 40 de la Constitución?

¿Es el Estado mexicano actual un Estado de indefensión e incertidumbre jurídica?

4. Metodología y procedimientos

El presente documento se desarrolla basándose en el método inductivo usando la investigación denominada aplicada en su división del tipo confirmatoria (causal), o, visto desde otro ángulo, es decir, desde el punto de vista “del método frente al objeto de estudio”, se aplica la investigación no experimental del tipo correlacional, respetando el modelo APA sexta edición con excepción de los casos donde particularmente el catedrático responsable de la materia señala algo distinto. Todo lo anterior referido a la forma en que el Estado mexicano está actuando a través de su administración pública y de los efectos colaterales percibidos por los ciudadanos y los propios juzgados. Se efectuó una revisión de la literatura y estadísticas tanto históricas como recientes de las principales organizaciones y legislaciones relacionadas tanto a nivel local como algunas comparaciones con el extranjero. Debido a la limitación en tiempo para la elaboración del documento, no es pretensión desarrollarlo de

manera extensa, sino más bien resumida, de tal forma que, a pesar de que, si existirá una conclusión, el mismo dará pauta a futuras investigaciones complementarias.

Del mismo modo, cabe destacar que la población Asesor incluye tanto los aspectos administrativo-políticos y también jurídicos de la relación Estado-gobernado de la república mexicana, aunque el subgrupo va más sesgado al tema jurídico-fiscal y un poco menos enfoque al administrativo-político.

CAPÍTULO II

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1. Estado

1.1 Definición. “(...) el Estado es una creación humana establecida en la Constitución, es decir, el nacimiento de un Estado determinado surge simultáneamente con su Constitución; ambos por regla general son producto del poder u órgano constituyente, que les crea y da vida.” (Galindo, 2000:89).

El Estado como ente cultural tiene por objeto la obtención de un fin. Ya sabemos que todo producto de la cultura se caracteriza por llevar dentro de sí una finalidad, aquello para lo cual es creado por el hombre. Siendo el Estado una institución humana, tiene naturalmente un fin. No puede dejar de tenerlo. Los hombres que componen el Estado, los gobernantes y los gobernados, al agruparse formando la sociedad estatal, persiguen un fin. El Estado encierra en su actividad una intención que es la determinante y el motor de toda su estructura...El fin será el que determine las atribuciones, la competencia material de los diferentes órganos del Estado, y en

función de esa competencia se crearán órganos. En este fin está la razón última del Estado y su diferencia específica con otras sociedades. (Porrúa, 1999:198).

(...) “la existencia de estructuras diversas, que tienen entre sí el nexo común de ser articulaciones para solventar el problema de la complejidad social” (...). (Guerrero y Vacaro, n.d., Pág 1).

“El Estado es la institución política principal del Mundo Moderno y a la vez el principal agente en las relaciones internacionales en el mismo período”. (Villegas, 2004:5).

El Estado, como concepción es una abstracción. Identificar al Estado con sus elementos constitutivos (pueblo, territorio, poder), se suma a la idea del Estado como la autoridad que puede obligar a algo que por iniciativa y libertad natural alguien podría resistirse a hacer. (Juárez, 2012:25).

1.2 Orígenes e historia. Francisco Porrúa Pérez en su obra *Teoría del Estado* (Porrúa, 1999:48-88), relata los hechos políticos más importantes que dieron origen al Estado, los cuales resumo a continuación:

1.2.1 Asia Oriental. Es a partir del siglo VIII, a. J. C., que se da la existencia de sociedades políticas gobernadas por un monarca. La monarquía se perpetuaba hereditariamente, por lo que las familias titulares del poder se les conoce como dinastías imperiales. En aquel tiempo, se suponía al emperador como el representante del cielo y señor absoluto de todos los hombres, aunque respondía ante el pueblo con la concordancia de sus actos con las leyes.

1.2.2 Antiguo Oriente. Existieron culturas humanas de gran esplendor como Egipto, Persia, Siria, Israel, etcétera. Al existir por milenios, estos pueblos contaron con inagotables hechos políticos; sin embargo, esta época se caracterizó por tener un “Estado despótico o teocrático”. Al ser despótico, la autoridad era tan regia que la capacidad de las personas en el derecho privado estaba restringida, así como la capacidad para actuar dentro del derecho público se limitaba a los individuos pertenecientes a una clase o casta privilegiada. Y el ser teocrático significa que existía una relación entre el soberano de la comunidad política y la divinidad.

1.2.3 Grecia. Dos organizaciones políticas se dieron en la cultura griega, la espartana y la ateniense. Con el tiempo, los habitantes de las polis tomaron parte en las tareas del Gobierno, reconociéndoseles como hombres libres. No obstante, no participaron en un plano de igualdad pues la sociedad se dividía en cuatro clases, según su fortuna y los derechos y deberes estaban en proporción a su riqueza. La característica fundamental de la organización política griega es la potestad absoluta en relación con la misma, con la organización política, que su capacidad para participar en ella a través de la elaboración de las leyes. Ya formuladas las leyes eran impuestas a los individuos, de tal manera que no tenían libertad, en el sentido actual.

1.2.4 Roma. Su fundación data del año 750 a. J. C. En sus comienzos, el gobierno era monárquica electiva y se dividía en dos clases: los patricios y la plebe. Los patricios era la clase aristocrática tenía derechos políticos, y que al reunirse en diez grupos formaban las curias. En el año 506 a. J. C. aparece la República como forma de gobierno, pero es a finales del siglo II a. J. C. que empieza el ocaso de la República. Y se instaura el imperio como régimen monárquico absoluto que perdura hasta

la caída de Roma en el 476 d. J. C. Cabe decir que tratándose de las relaciones de Derecho Público existía una esfera de derechos de los hombres, pero limitada ya que el hombre no siempre tenía la calidad de persona. Esta situación perduró, incluso después de haber adoptado el cristianismo.

1.2.5 Edad media. Tuvo su florecimiento con la caída del imperio romano de occidente en el año 476. En esta época siguen influyendo las ideas del imperio romano recogidas por Carlomagno, aunque dentro de las comunidades políticas desaparece el monismo político. En la época feudal se acentúa el dualismo, es decir, al lado del poder del soberano existía la justicia popular. El poder se fue dividiendo de tal manera que se afirmó la posición de los señores feudales dentro de la comunidad política.

1.2.6 Estado moderno. A finales de la Edad Media se hicieron esfuerzos por unir al Estado, territorial y administrativamente, puesto que ésta se encontraba dividida a causa del feudalismo. Con el Renacimiento surgió la concepción del Estado Moderno, al igual que revalorizó la razón humana la colocó como centro del universo. Se supera el dualismo; el Estado está por encima de la Iglesia; desaparece el feudalismo. En esta época nace el absolutismo que logró nivelar las diferencias entre las clases y los ciudadanos llegaron a tener igualdad jurídica con sus variantes desde 1789 hasta nuestros días. La estructuración constitucional del Estado Moderno es de una comunidad nacional organizada de acuerdo a las funciones correspondientes, además de contar con un orden jurídico que regula las relaciones entre el Estado y los individuos; reconociendo la libertad individual, y sometido al poder del Estado de manera limitada, siempre con el fin de obtener el bien común.

Ciertamente, Massimo Severo Giannini, establece en su obra Derecho Administrativo, que las guerras de finales del siglo XV impulsaron a España, Francia e Inglaterra a constituirse en Estados. Por lo tanto, el nacimiento del Estado comprende el período desde finales del siglo XV, hasta el siglo XVII.

Posteriormente, durante los siglos XVII, XVIII y XIX, el Estado Constitucional tuvo su origen con J. Locke, Montesquieu, Rousseau, T. Jefferson y el abate Siéyes, conforme a lo establecido por el Diccionario de Historia Universal I, el cual indica que, entre las exigencias del pensamiento liberal constitucional, debía poseer una constitución no otorgada, introducir la división de poderes y garantizar los derechos fundamentales.

El Estado es una realidad política. Es un hecho social de naturaleza política, en el que los hombres se agrupan con sus semejantes, estableciendo entre sí una serie de relaciones, una intercomunicación de ideas y de servicios, fundamentalmente por la división de tareas.

Tales hechos sociales han existido desde la aparición del hombre y seguirán existiendo mientras subsista la humanidad.

Para el pensador ginebrino Juan Jacobo Rousseau (1721-1778), en su obra más importante y conocida de su doctrina política El Contrato Social de 1762, plasma que el hombre vivía en una edad primitiva de total libertad, en un plano de igualdad con los demás. Obviamente, la necesidad de subsistir hizo que el hombre empezara a desarrollarse, naciendo con ello el enfrentamiento y la desigualdad entre los hombres y dando fin al estado primitivo. Sin embargo, para recuperar la libertad optaron por someterse a un gobernante dando vida al Estado, en donde

los hombres ceden a la comunidad, quien fuera la depositaria de la soberanía, sus derechos que serían devueltos mediante protección. Era un pacto habido entre hombres en el cual le cedían al gobernante soberano la voluntad colectiva, desafortunadamente, hubo abuso de poder y por ello, fue necesario hacer uso del Derecho, quedando tanto los gobernantes como los gobernados dentro del marco de la ley. Es decir, los gobernantes sólo pueden hacer lo que la ley les permite, y los gobernados pueden realizar todo lo que no les prohíban. Por lo tanto, un Estado regido por normas jurídicas vigentes se considera como Estado de Derecho.

Sin duda, resulta difícil referirse a la concepción de Estado durante la edad media o durante la antigüedad, a pesar de que muchas sociedades, durante estas épocas, desarrollaron ciertos rasgos que se pueden incluir en la noción que se tiene en la actualidad sobre el Estado Moderno, como se ha analizado en los puntos anteriores. Esta situación deriva de que el origen del Estado Moderno, propiamente tal, se da en el siglo XVI, en la parte occidental de Europa, situación ante la cual los historiadores están de acuerdo en su mayoría. Sin embargo, las razones y motivos que tuvo el surgimiento de este Estado han estado siempre en la discusión historiográfica. Por un lado, tenemos autores que sugieren que el Estado Moderno nace producto de que la larga crisis de la económica y social de la sociedad europea desde el siglo XIV, habría puesto de manifiesto, una serie de dificultades y de limitantes al viejo sistema de producción feudal, situación la cual habría dado origen al Estado Moderno, producto de la necesidad de ordenar a la sociedad bajo una autoridad central respetada y reconocida como tal por todos, tesis que pertenece al historiador Perry Anderson. Por su lado para el historiador Marco Antonio Huesbe, el surgimiento del Absolutismo, como primer sistema

político mundial, habría dado origen al Estado Moderno, incluyendo sus instituciones y el derecho.

Tenemos que si bien estas dos visiones historiográficas difieren de los motivos por los cuales nació el Estado Moderno, coinciden en que fue a lo largo del siglo XVI y en Europa, y más importante aún, de que el Estado Moderno, es un acontecimiento único y nuevo. En este sentido hay otros autores que si bien coinciden con los dos primeros elementos (de que el Estado Moderno nace en el siglo XVI y lo hace en Europa occidental), difieren de que el Estado Moderno se trate de un acontecimiento nuevo en Europa occidental. En este sentido el historiador y cientista político Jean Touchard, señala que en realidad lo que ocurrió en Europa durante el siglo XVI con respecto al Estado, es que este en realidad ya existía, sin embargo, en esta época se empezó a modernizar, ya sea en Francia desde Luis XI, en Inglaterra a partir de los dos primeros Tudor, o en España con Fernando e Isabel, proceso en el cual la autoridad de los monarcas se afirma lo que permite que se de este proceso de modernización. Esta visión parte de la idea de que el Estado es una institución que ya existía en Europa, y que a través de la historia ha ido cambiando de forma, más no de fondo. (Villegas, 2004:35).

1.3 Diferentes tipos de Estado. A efectos de plantear contexto en el subtema, se tomará en cuenta la opinión vertida por Antonio Guerrero y Moisés Vacaro en su obra denominada “El origen del Estado” donde, en su página primera señalan que el origen del Estado recae en dos grandes teorías: la de la armonía social y la del conflicto, las cuales son literalmente mostradas en las líneas siguientes:

La primera de estas dos grandes teorías es la de la armonía social, entendida en el sentido de que existe una tendencia interna dentro de cada sociedad que la conduce a reproducirse a sí misma dentro de un esquema de colaboración entre sus integrantes, corrigiendo, al tiempo, aquellos elementos que pueden tender al desequilibrio o adaptando según sus necesidades, aquellos aspectos novedosos para la misma.

La otra gran teoría sobre la organización social es la teoría del conflicto, entendida como una tendencia de la sociedad a resolver las contradicciones y tensiones, tanto externas como internas. Spencer sostiene la idea de que el conflicto se desenvuelve en una dinámica externa, siendo resuelto generalmente por la guerra, cuando la sociedad está capacitada para afrontar, gracias a un mejor gobierno, sus conflictos con otras sociedades; la adecuación de todos los recursos para el logro de la victoria hace posible la cooperación que permite el cumplimiento del objetivo marcado y así mismo, la reiterada victoria permite el aumento de prestigio y poder de una minoría dirigente de la guerra. Marx y Engels son los sostenedores de otra variante en la teoría del conflicto; ésta se basa en la dinámica interna del mismo y se plantea como el intento de solución diacrónica de una situación sincrónica, cual es la apropiación de los medios de producción por parte de una minoría de la sociedad.

Estas dos corrientes tienen en común la asunción de la lucha, sin descartar el uso de la violencia, como método para lograr los objetivos sociales; no obstante, mantienen entre sí una importante diferencia, pues mientras la teoría del conflicto como dinámica externa, necesita de la existencia de una estructura estatal o paraestatal e incluso se apoya en ella como medio para lograr sus objetivos, tendiendo a reprimir cualquier actuación que no aporte en la línea de consecución del objetivo marcado,

la teoría defendida por el materialismo histórico tiene como objetivo precisamente lo contrario, es decir: la abolición del Estado, al que entiende como un elemento de represión del conjunto de la sociedad. Como se puede observar, tanto Spencer, de una parte, como Marx y Engels de la otra entienden el Estado como un elemento represivo, pero con la importante diferencia, al mismo tiempo, de que para Spencer el Estado es necesario, y para Marx y Engels es el elemento a suprimir.

Francisco Javier Juárez Jonapa, en su obra *Teoría general del Estado* (Juárez, 2012:191), señala:

Al Estado, construido sobre la base de la observación en los Estados reales, lo llama Jellinek "tipo empírico".

Para él, el concepto del Estado, en tanto no comprende el estudio de un Estado concreto, consiste en hallar, en construir ese "tipo empírico".

Por otra parte, Porrúa Pérez, considera que si se toma en cuenta el Estado ideal (la idea del Estado que sea visto para Bluntschli), entonces se llegará a la construcción de un "tipo ideal", de un Estado perfecto posible.

Según Adolfo Posada, ni el ideal abstracto ni el empírico histórico deben tomarse como conceptos absolutos para elaborar el concepto del Estado, él busca una teoría intermedia, elaborando su propia doctrina, armonizando lo real con lo racional, y entonces dice que lo ideal debe ser una expresión racional de lo real. Para Porrúa Pérez, se debe contrastar los datos de la realidad con las construcciones mentales, con el razonamiento, para así poder elaborar un concepto válido del Estado.

2. La Administración Pública

2.1 Definición. “La ciencia administrativa es el conocimiento de los principios, en virtud de los cuales debe arreglarse la acción de las autoridades a quienes se encargue el manejo de los intereses y negocios sociales que tengan el carácter de públicos” (Guerrero, 2000:65).

La Ciencia de la Administración Pública es una ciencia social que tiene por objeto la actividad del órgano ejecutivo cuando se trata de la realización o prestación de los servicios públicos en beneficio de la comunidad, buscando siempre que su prestación se lleve a cabo de manera racional a efecto de que los medios e instrumentos de la misma se apliquen de manera idónea para obtener el resultado más favorable por el esfuerzo conjunto realizado. (Galindo, 2000:6)

La Administración Pública esencialmente se concibe como aquella parte del Poder Ejecutivo a cuyo cargo está la responsabilidad de desarrollar la función administrativa, entendiéndose desde un punto de vista orgánico, que se refiere al órgano o conjunto de órganos estatales que desarrollan la función administrativa, y desde el punto de vista formal o material, que se según el cual debe entenderse como la actividad que desempeñan este órgano o conjunto de órganos, todo ello encaminado satisfacer las necesidades de la ciudadanía en su conjunto. (Gamboa y Gutiérrez, 2007:62)

2.2 Orígenes e historia. “Como ya quedó expuesto los antecedentes de la administración pública tienen su origen en tiempos remotos de la humanidad y para los países occidentales se encuentran en la cuna de nuestra civilización: Grecia y Roma” (Galindo, 2000:17).

La Ciencia de la Administración Pública tiene una gran importancia en este final del siglo XX y principios del XXI. A pesar de que tiene como antecedentes a las ciencias camerales, expresión del pensamiento del Estado absolutista y al que surgió de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII cuyo pensamiento abarcó dos vertientes importantes de la actividad gubernamental en relación con los gobernados: por una parte el Derecho Constitucional y la Política, y por la otra, la actividad que ejecuta el proyecto político, es decir la administración pública, y a pesar de ello se puso poco empeño en enriquecer el contenido y parámetros de esta ciencia o teoría de la administración pública. La poca atención prestada a ella se advierte claramente en que en las escuelas y universidades no se le reconoció la importancia que tiene, pues en las currículas de las materias y en el contenido de sus programas apenas y se advierte un intento para tratar sus temas. Corresponde a la segunda mitad del siglo XX entrar de lleno, hasta donde lo han logrado al estudio de la administración pública y reconocerle a plenitud el carácter científico que tiene, a pesar de que desde la primera década del siglo XIX, Carlos Juan Bautista BONNIN en sus "Principios de Administración Pública ", tuvo la preocupación fundamental de tipificarla como una verdadera ciencia. (Galindo, 2000:XIII)

2.3 Diferentes tipos de Administración Pública.

2.3.1 *La administración pública en la cultura anglosajona [Capitalista].* Estados Unidos es un país receptor de la ciencia de la administración pública. La obra que mejor representa el ambiente que propició el ingreso de la disciplina en esa nación es "El estudio de la administración" ("The Study of Administration"), de Woodrow WILSON, un artículo con el doble mérito de introducir la ciencia de la administración

pública y sentar bases sobre las cuales pudo plantearse en el terreno intelectual la necesidad de la carrera administrativa. El trabajo apareció en junio de 1887, mucho tiempo después que lo hicieran otros estudios pioneros de la ciencia de la administración en Europa y América latina; WILSON mismo explica el porqué de semejante tardanza. Para él, estudiar lo concerniente a la administración pública implica tres aspectos de interés: historia del estudio, o sea, tomar en consideración los aportes precedentes; precisar con exactitud en qué consiste el objeto del estudio, y establecer los métodos idóneos para dicho estudio, así como las ideas políticas más pertinentes para abordarlo. (Guerrero, 2000:73).

El pensador administrativo angloamericano opinaba que los gobiernos más desarrollados pasan por tres etapas: la primera es la propia del absolutismo y de la administración adaptada a él. La segunda consiste en la implantación de constituciones que eliminan a los Estados absolutistas, a los que se procura sustituir por gobiernos populares y, por ello, el establecimiento de la administración pública debe esperar en pro de esos principios. Finalmente, la última fase se caracteriza por el empeño del pueblo soberano en organizar a la administración a partir de la Constitución política." Por consiguiente, los gobiernos más avanzados en la práctica administrativa de la época de WILSON eran los que antaño había tenido regímenes absolutistas, iluminados con la idea de que los gobernantes son en realidad servidores de los gobernados. En los regímenes absolutistas la administración pública se organizó para servir al propósito general con la simplicidad y la efectividad propias de las iniciativas regidas por una voluntad única."

En el Reino Unido, por su condición geográfica insular y por el sentido de independencia y peculiaridad de sus habitantes, se generó un pensamiento administrativo de acuerdo con estas

condiciones. Como es sabido, las instituciones administrativas británicas son célebres por su autogestión, acorde con el intenso sentido de participación política ciudadana de los ingleses, escoceses y galeses, además de los norirlandeses. El hecho de que el Reino Unido abarque a Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte, unidas y autónomas a la vez, habla mucho de este espíritu de autogobierno propio de los británicos. (Guerrero, 2000:73).

2.3.2 La administración pública en los países socialistas.

La ciencia de la administración pública ha sido un campo de cultivo académico en una diversidad de países, con independencia del régimen político. La Rusia de hoy en día es heredera de estudios sobre la administración soviética que tal vez contribuyan a reorientar su presente y su futuro. En efecto, la ex Unión Soviética estuvo intensamente comprometida con el movimiento universal de la ciencia de la administración pública, pero sin perder las peculiaridades de su desarrollo histórico.

La construcción estatal fue una concepción científica cuya tesis sostenía que era necesario hacer que las masas sociales participaran en la administración del Estado, idea central del pensamiento administrativo leninista. La construcción estatal comprendía la agricultura, el comercio, la educación y la cultura, además del tema central del análisis científico de la gestión industrial. Abarcaba también a los organismos para administrativos o semi-administrativos, entre los que se hallaban las cooperativas y las asociaciones de producción. Esta concepción intelectual estaba estrechamente relacionada con el derecho administrativo, y estudiaba los usos y las costumbres como factores importantes dentro de los procesos de trabajo en los soviets. Como disciplina de enseñanza universitaria, la construcción estatal comprendía el examen de sí misma como

ciencia, el lugar y el papel de los soviets dentro de la dictadura del proletariado, la relación entre el Partido Comunista y los soviets, la administración pública nacional y de las repúblicas y la relación entre los soviets y las masas. (Guerrero, 2000:77).

3. El Estado Mexicano

3.1 Generalidades e historia El desarrollo de la ciencia de la administración pública en México, desde la Revolución hasta nuestros días, ha dejado frutos muy apreciables para el estudio de esta materia. Durante la Revolución y los años que siguieron se puso el acento en estudios prácticos de organización y reorganización, aunque también se elaboraron trabajos con cierto contenido de doctrina, en los que se describió el funcionamiento de la administración pública mexicana. Posteriormente, y hasta la fecha, la ciencia de la administración pública ha sido estudiada de un modo más intenso gracias a la creación de planteles de enseñanza de la misma, así como asociaciones civiles dedicadas a su promoción, pues la reforma administrativa le brindó un fuerte apoyo y una base muy sólida para su legitimación disciplinaria. (Guerrero, 2000:239)

A partir de la década de 1960-1970, en México se inicia el estudio de la administración pública reconociendo sus características científicas y de esta manera surgen escuelas, facultades y universidades en donde la tienen como contenido esencial de sus programas, que en el correr de la historia y de la geografía mexicana han tenido entre otras las siguientes denominaciones: Teoría de la Administración Pública, Ciencia de la Administración Pública. (Galindo, 2000:XIII).

La administración pública mexicana nunca ha dejado de crecer, cuando menos de mediados del siglo XVIII a la fecha.

Tampoco decreció en la época librecambista porfiriana a pesar de la supresión de muchas entidades descentralizadas, pues sus funciones fueron asumidas por secretarías de Estado, a pesar de la retracción de la actividad económica del Estado. En el largo período presidencial porfiriano disminuyó el ritmo de crecimiento, pero no cesó, aunque ciertamente muchas de las tradiciones administrativas fueron marginadas pese a que Díaz propugnaba más administración que política. Esto se explica por el carácter transitorio de la época que va de Lerdo de Tejada al último cuatrienio porfiriano, que se significó por un vacío de poder de clase: los estamentos habían sido derrotados y la burguesía no pudo sustituirlos como clase dominante, toda vez que el proletariado estaba en proceso de gestación. (Guerrero, 1989:507).

Desde los tiempos del régimen del Presidente José López Portillo se anunciaron modificaciones del estado de cosas. En este período se inició el cuestionamiento de las formas tradicionales de la política en México y en materia de administración pública se emprendió la más radical reforma desde los días de Cárdenas. Otro indicio del camino que se estaba siguiendo fue el plan de depuración del número de entidades "paraestatales" y el programa de fortalecimiento estatal y municipal. Sin embargo, el modelo básico de organización y funcionamiento del Estado seguía en pie y firmemente adherido a las tradiciones políticas posrevolucionarias y aun las revolucionarias, como lo vino a confirmar la expropiación bancaria de 1982. Más sensibles fueron los cambios en el período de Gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, que aceleró el proceso de desincorporación de entidades descentralizadas, devolvió acciones de la banca a los expropietarios, suprimió plazas de confianza de la administración centralizada, abolió órganos y secciones de ésta misma y reformó la Constitución vigente para

dar margen a un más amplio desarrollo de la vida municipal. De hecho, se abrió el camino a la reforma del Estado y es esta reforma la que enmarca nuestro ejercicio de prospección. (Guerrero, 1989:771).

4. Soluciones que se han planteado a lo largo del tiempo

4.1 La configuración del Estado interventor en México.

El Estado mexicano se convirtió, desde la figura del Estado Social de Derecho creada en 1917, en el punto de encuentro de los distintos intereses y en el centro de objetivación de las transformaciones económicas donde los objetivos de pleno empleo, igualdad y crecimiento estaban íntimamente relacionados con un gasto estatal redistributivo. Su objetivo fundamental se construyó ampliando las funciones estatales a través de la estructura económica y administrativa creciente. En paralelo, comenzó a utilizar políticas fiscales y monetarias expansivas no sólo para hacer frente a las fluctuaciones económicas y reforzar el sistema económico y la rentabilidad del capital, sino también para brindar atención, aunque fuera de forma parcial, a las demandas de amplios sectores de la población, por lo que impulsó un conjunto de políticas públicas orientadas a apuntalar la estrategia de desarrollo. Entre los objetivos de esas políticas se pueden mencionar los siguientes:

a) Promover reformas sociales, vinculadas a las garantías y los derechos ciudadanos establecidos en la Constitución, y que implicaban la participación estatal en la gestión de servicios de salud pública, educación, vivienda, así como producción y distribución de bienes de consumo básico, entre otros.

b) Poner en marcha un esquema amplio de subsidios, no sólo en la forma de apoyos fiscales, financieros y con precios y tarifas públicas reducidas a fin de mejorar la rentabilidad del

capital, sino también con la creación de infraestructura industrial y urbana.

c) Crear conglomerados productivos de carácter público, cuya producción se destinó en la forma de insumos, bienes y servicios. A fortalecer las cadenas productivas de la industria nacional. (Huerta, 2005:126).

4.2 El modelo económico neoliberal. El neoliberalismo, que antes de la década de 1930 había perdido la batalla en la arena de la conducción de la política económica, ahora se encontraba en condiciones propicias para regresar al escenario económico y político. En el tiempo que permaneció a la expectativa del progreso de la economía mundial, fue afinando ideológicamente su propuesta acerca de la existencia de una separación supuestamente natural entre el Estado y la sociedad, y dio mayor formalización a sus planteamientos teóricos.

Es decir, se perfeccionó en su versión económica, pero también en la política el neoconservadurismo. Los cuestionamientos que se hicieron al Estado benefactor no sólo vinieron del terreno económico, en cuanto al manejo principalmente de la política económica y de la intervención pública en las actividades económicas, sino también del político y del ideológico, por la avanzada de las ideas de la derecha o conservadoras. En éstas, la libre competencia sirve tanto para expandir la esfera de las libertades políticas y económicas de los ciudadanos, como para estimular la creatividad, la innovación, el progreso técnico y el desarrollo económico. De acuerdo con estas ideas, cualquier intervención que perturbe el ajuste automático del mercado .si los precios no se fijan libremente por las fuerzas del mercado. hace imposible la realización del cálculo empresarial y elimina la eficiencia económica de las sociedades.

En esa perspectiva, la intromisión estatal en el funcionamiento del sistema de precios es la que deteriora la estabilidad y los equilibrios naturales del mercado. De ahí que constituya la raíz de todos los problemas de la sociedad, pues si todos los agentes económicos son iguales, poseen la misma información y cuentan con una dotación de riqueza que utilizan de manera racional en la adquisición de bienes y servicios; no se requiere que alguna instancia pública intervenga en los procesos económicos.

Con esas consideraciones se presenta una férrea oposición a la participación del Estado en la economía, pues supone que es la actividad estatal, principalmente la vinculada con políticas sociales y actividades productivas, la que impide que el sistema económico se autorregule por sí mismo y, por tanto, el neoliberalismo no desea el intervencionismo estatal en cualquiera de sus modalidades o versiones. Inclusive cualquier acto de gobierno dirigido a mantener los medios de consumo social o colectivo se considera dañino porque la ampliación de las acciones estatales interfiere en las actividades de los individuos produciendo distorsiones en el mercado y alterando con esto las relaciones sociales. (Huerta, 2005:133).

El régimen jurídico de la administración pública es muy rico y variado, en primer término, su marco constitucional está contenido en los artículos 90, 92, 93 Y otros de la Constitución de 1917. El texto actual del artículo 90 citado establece lo siguiente: "La Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las Secretarías de Estado y Departamentos Administrativos y definirá las bases generales

de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su operación".

5. Federalismo

5.1 Definición y concepto. El federalismo es un esquema de organización política que conlleva un concepto normativo y en donde son necesarias dos fuentes de autoridad: los poderes centrales y los locales. En los sistemas federales, las distintas unidades territoriales del país pueden adoptar denominaciones como estados, municipios, provincias, entre otros. Estas pueden ser gobernadas con relativa autonomía y coordinadas por una entidad central. Es importante mencionar que existe una amplia variedad de sistemas federales en el mundo, cada uno con distintos grados de autonomía en sus unidades y concentrando diversas facultades en el gobierno central. Esta composición responde a necesidades específicas, lo que impide definir el “esquema ideal” federalista. (Ramírez, 2009:3).

En primer término, el federalismo puede definirse como una forma de organizar el poder político y de estructurar al Estado, distinguible de otras formas como es el modelo del Estado unitario. Precisamente, el contraste entre uno y otro modelo nos permitirá elaborar un primer marco para definir a los sistemas federales. Planteado en términos generales, mientras el federalismo contiene en su organización política y administrativa por lo menos dos niveles u órdenes de gobierno, cada cual con una distribución determinada de atribuciones y de responsabilidades públicas, además de una independencia política recíproca, el Estado unitario condensa el poder político en una sola organización institucional. La diferencia esencial entre ambos modelos es, entonces, la estructura dual del federalismo, en donde cada una de las partes conserva una capacidad propia de reproducción política (independencia) y

atribuciones que tienen una delimitación territorial. La forma común de este formato dual es la presencia de un gobierno general (denominado nacional o federal) y, por otro lado, determinado número de gobiernos de unidades subnacionales (usualmente estados o repúblicas, además de los Länders en Alemania o los cantones suizos), cada uno con determinadas capacidades políticas que en todo momento evitan vínculos de subordinación o de dominación recíprocos. (Guillen, 2016:19).

El federalismo supone el reconocimiento de la existencia de fuerzas distintas del poder central que tienen su propia sustantividad, y que en esa virtud reclaman un campo propio de acción jurídico-política traducido entre otras cosas en la posibilidad de crear por sí mismos normas jurídicas. (Carbonell, 2003:380).

5.2 Federalismo en México. El sistema federal fue adoptado por primera vez en México en la Constitución de 1824, que en su artículo 4 señalaba: “La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa popular federal”, y en el artículo siguiente mencionaba a las partes integrantes de la Federación. Durante el siglo XIX el federalismo mexicano sufrió, como casi todas las demás instituciones del país, varias crisis de anarquía. Tanto el desorden fiscal que producía la duplicidad de impuestos y las trabas arancelarias entre las entidades federativas, como la presencia de cacicazgos locales, dieron lugar a importantes exigencias para revertir el modelo federal y convertir a México al centralismo.

El tema fue incluso una cuestión central de la disputa entre los partidos políticos de ese tiempo. Los liberales luchaban por la implantación y el mantenimiento del federalismo, mientras que los conservadores tenían por bandera el centralismo¹ y

lograron que éste se llegara a reconocer en algunos documentos constitucionales del siglo pasado. A pesar de todo, desde la Constitución de 1857 el federalismo se ha mantenido como uno de los postulados fundamentales del constitucionalismo mexicano.

Aunque, como es obvio, el modelo federal de la Constitución fue copiado de la Constitución norteamericana, en el caso de México, al revés de como sucedió en el país de origen de la institución, el federalismo no sirvió para conjuntar realidades anteriores y en cierta forma dispersas, sino para crear unidades descentralizadas dentro de un país con tradiciones fuertemente centralistas heredadas del periodo colonial — implantando el llamado federalismo “segregativo” o “descentralizador”—. (Carbonell, 2003:379).

El último párrafo del artículo 90 de la Constitución Mexicana señala: El Ejecutivo Federal representará a la Federación en los asuntos en que ésta sea parte, por conducto de la dependencia que tenga a su cargo la función de Consejero Jurídico del Gobierno o de las Secretarías de Estado, en los términos que establezca la ley.

Además, otros dos artículos de la misma carta magna señalan:

Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados y la Ciudad de México, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada Estado y de la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Desde su primera constitución como Estado independiente (1824), México optó por tener un sistema federal. Ese es el tipo de organización política que con breves interrupciones hemos tenido a lo largo de nuestra trayectoria constitucional. Sin embargo, debemos mencionar que en la mayor parte de nuestra historia, no hemos vivido un federalismo real. Y no lo hemos hecho, porque por muchos años tampoco hemos vivido una democracia constitucional real. Gobiernos autoritarios como el de Porfirio Díaz, o el del llamado sistema de partido hegemónico, hicieron que las normas constitucionales que nos hablan de la soberanía de las entidades federativas y de la autonomía de los municipios quedaran, por así decirlo, como “dormidas”. (Serna, 2016:1).

El federalismo permite que los partidos políticos que han sido derrotados en las elecciones presidenciales y legislativas federales luchen y ganen elecciones en el ámbito local y, con ello, se vayan ejercitando en el desempeño gubernativo y puedan desplegar las contraofertas que sostienen como programas futuros de acción desde la oposición federal. Con el federalismo se multiplican los centros democráticos de decisión dentro del Estado. (Carbonell, 2003:381).

Al margen de la mayor cooperación o división de competencias que pueda existir entre las entidades federativas y

la Federación, en la mayor parte de los estados federales aquéllas intervienen en algunas etapas de la creación de normas federales. Desde luego, intervienen de forma continua desde las cámaras de representación territorial, como el Senado en México, pero también se les otorgan ciertas facultades específicas que les permiten contribuir con los poderes federales en el proceso de cambio e innovación del orden jurídico nacional. En México las entidades federativas tienen intervención en el procedimiento legislativo federal y en el procedimiento de reforma constitucional. (Carbonell, 2003:394).

Es difícil generalizar en un país tan diverso como lo es México. Sin embargo, entre las causas que explican la forma en que ha evolucionado nuestro sistema federal en los últimos 20 años, se encuentran la falta de capacidad de gestión eficaz de los asuntos públicos y la ausencia de verdaderos y eficaces controles constitucionales a nivel de muchas entidades federativas y de la mayoría de los municipios. ¿Cómo generar estas capacidades y controles en estos componentes esenciales de nuestro sistema federal? He ahí el gran reto del sistema federal mexicano en el siglo XXI. (Serna, 2016:6).

CAPÍTULO III

HECHOS VIOLATORIOS INVESTIGADOS

1. Situación actual

Para ir dando contexto a esta sección se iniciará con las transcripciones literales de las referencias y fuentes investigadas, para posteriormente generar un muy breve resumen, o bien, señalar algunas palabras claves que permitirán

enfaticar la idea general, posterior se repetirá el proceso con una nueva referencia, y así sucesiva y reiteradamente.

Primer referencia. La administración pública de las entidades federadas y de los municipios tienen un régimen jurídico determinado por sus propias leyes, qué sin contradecir el contenido del pacto federal, la rigen y reglamentan en los términos establecidos en sus constituciones locales, en las leyes orgánicas de la administración pública del Estado de que se trate, en las leyes de la administración pública municipal del propio Estado y en las leyes que se refieran a la administración pública paraestatal. (Galindo, 2000:110).

Resumen y palabras claves: a) el régimen jurídico es determinado por las propias leyes, b) las leyes no contradirán el pacto federal, y, c) las leyes se regirán y reglamentarán en los términos establecidos en las constituciones locales.

Segunda referencia. De acuerdo al Diccionario de Derecho de Rafael de Pina y Rafael de Pina Vara, “El Estado de Derecho es aquel cuyo poder se encuentra determinado por preceptos legales, de tal modo que no puede exigir de sus miembros ninguna acción u omisión que no tenga su fundamento en la existencia de una norma jurídica preestablecida” (De Pina, 1999:276).

Resumen y palabras clave: a) no se puede exigir lo que no se tenga su fundamento en la norma jurídica.

Tercera referencia. Habrá siempre una gran diferencia entre someter una multitud y regir una sociedad. Que hombres dispersos estén sucesivamente sojuzgados a uno solo, cualquiera que sea el número, yo sólo veo en esa colectividad un señor y esclavos, jamás un pueblo y su jefe: representarán, si se quiere,

una agrupación, mas no una asociación, porque no hay ni bien público ni cuerpo político. Ese hombre, aun cuando haya sojuzgado a medio mundo, no es siempre más que un particular; su interés, separado del de los demás, será siempre un interés privado. Si llega a perecer, su imperio, tras él, se dispersará y permanecerá sin unión ni adherencia, como un roble se destruye y cae convertido en un montón de cenizas después que el fuego lo ha consumido. (Rousseau, 1999:13).

Resumen y palabras clave: a) Que hombres dispersos estén sucesivamente sojuzgados a uno solo, cualquiera que sea el número, yo sólo veo en esa colectividad un señor y esclavos, b) porque no hay ni bien público, ni cuerpo político, c) ese hombre, aun cuando haya sojuzgado a medio mundo, no es siempre más que un particular.

Cuarta referencia. Las actividades del Estado tienden a desarrollarse de acuerdo con el contenido propio de las funciones atribuidas a sus órganos.

Entre otras funciones pueden mencionarse como fundamentales las siguientes:

1. Función legislativa, para formular las normas jurídicas necesarias para regular las relaciones entre particulares, entre los órganos del poder público, y las de los gobernantes y los gobernados.

2. Función jurisdiccional, para tutelar el ordenamiento jurídico y aplicar las leyes a casos concretos.

3. Función administrativa o función gubernamental, para promover la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, y fomentar el bienestar y el progreso de la colectividad. (Juárez, 2014:257).

Resumen y palabras claves: a) promover la satisfacción de necesidades de los ciudadanos, b) fomentar el bienestar y el progreso de la colectividad, y, c) Las actividades del Estado tienden a desarrollarse de acuerdo con el contenido propio de las funciones atribuidas a sus órganos.

Quinta referencia [...] las garantías de seguridad son derechos públicos subjetivos a favor de los gobernados, que pueden oponerse a los órganos estatales para exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, para que estos no caigan en la indefensión o la incertidumbre jurídica. (Islas, 2010:78).

Resumen y palabras clave: a) pueden oponerse a los órganos estatales, b) para exigirles c) que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión de actos que pudieran afectar.

Sexta referencia. Según la Real Academia Española, se citan textualmente algunas definiciones:

Indefensión.

1. f. Falta de defensa, situación de las personas o cosas que están indefensas.

2. f. Der. Situación en que se coloca a quien se impide o se limita indebidamente la defensa de su derecho en un procedimiento administrativo o judicial.

Incetidumbre.

f. Falta de certidumbre.

Certidumbre

1. f. certeza.

2. f. desus. Obligación de cumplir algo.

Certeza.

De cierto.

1. f. Conocimiento seguro y claro de algo.

2. f. Firme adhesión de la mente a algo conocible, sin temor de errar.

Resumen y palabras clave: a) conocimiento seguro y claro de algo, b) sin temor de errar, c) limita indebidamente la defensa de su derecho.

Séptima referencia. El crecimiento de la productividad de México repuntó recientemente en los sectores que se beneficiaron de las reformas estructurales: energético (electricidad, petróleo y gas), financiero y de telecomunicaciones. La apertura comercial, la inversión extranjera directa, la integración en las cadenas globales de valor y los incentivos a la innovación han impulsado las exportaciones, en especial las de automóviles. Sin embargo, otros sectores se han rezagado, al verse afectados por regulaciones locales demasiado rigurosas, instituciones jurídicas débiles, informalidad arraigada, corrupción y desarrollo financiero insuficiente. Es indispensable llevar a cabo reformas adicionales para solucionar estos problemas. (OCDE, 2017, Pág. 4).

Resumen y palabras clave: a) regulaciones demasiado rigurosas, b) instituciones jurídicas débiles, c) informalidad arraigada, d) corrupción, y, e) desarrollo financiero insuficiente.

Octava referencia. A diferencia de la obligación estatal y autoritaria que se deriva de la relación jurídica que implica las demás garantías individuales. y que ostenta una naturaleza

negativa en la generalidad de los casos, la que dimana de las garantías de seguridad jurídica es eminentemente positiva en términos generales. ya que se traduce, no en mero respeto o en una abstención de vulnerar, sino en el cumplimiento efectivo de todos aquellos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias, etcétera, cuya observancia sea jurídicamente necesaria para que un acto de autoridad produzca válidamente la afectación particular, en la esfera del gobernado, que esté destinado a realizar. Así, verbigracia, si a una persona se le pretende privar de su libertad por un acto autoritario, se le debe oír en defensa, de acuerdo con las formalidades esenciales del procedimiento, etcétera. requisitos o condiciones para cuya observancia la autoridad debe desempeñar una conducta positiva. (Cuenca, 1985:360).

Resumen y palabras clave: a) cumplimiento de requisitos cuya observancia sea jurídicamente necesaria, b) para que un acto de autoridad produzca válidamente la afectación particular.

Novena referencia. Artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

Resumen y palabras clave: a) El derecho a la información será garantizado por el Estado, b) toda persona tiene derecho al libre acceso a información oportuna c) por cualquier medio de expresión d) de cualquier índole.

Décima referencia. El Artículo segundo de la Ley del Servicio de Administración Tributaria señala claramente que “El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de (...) facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.”

Resumen y palabras clave: a) facilitar, b) incentivar, c) el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, d) proporcionar la información necesaria.

Décimo primera referencia. Artículo 31, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son obligaciones de los mexicanos: (...) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

Resumen y palabras clave: a) contribuir b) de la manera proporcional y equitativa, b) que dispongan las leyes.

Décimo segunda referencia. Real Academia de la Lengua Española:

Orientación.

1. f. Acción y efecto de orientar u orientarse.
2. f. Posición o dirección de algo respecto a un punto cardinal.

Orientar.

De oriente.

1. tr. Fijar la posición o dirección de algo respecto de un lugar, especialmente un punto cardinal.

2. tr. Dar a alguien información o consejo en relación con un determinado fin. U. t. c. prnl.

3. tr. Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un lugar determinado. U. t. c. prnl.

4. tr. Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado. U. t. c. prnl.

5. tr. Geogr. Designar en un mapa, por medio de una flecha u otro signo, el punto septentrional, para que se venga en conocimiento de la situación de los objetos que comprende.

6. tr. Mar. Disponer las velas de un buque de manera que reciban el viento favorable.

Resumen y palabras clave: a) dar a alguien información o consejo b) dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado.

Décimo tercera referencia. Artículo 39. Constitución política mexicana. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Artículo 40. Constitución política mexicana. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Resumen y palabras clave: a) la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, b) todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste, c) el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

Décimo cuarta referencia. Emanada del chat del Servicio de Administración Tributaria, donde se consultó un mismo tema a tres asesores diferentes, el mismo día y con solo unos minutos de diferencia.

Consulta número uno:

Bienvenido al chat de SAT - Información Fiscal
“La información contenida en la presente conversación no crea obligaciones ni derechos distintos de los establecidos en las disposiciones fiscales”.

[14:16:33] Asesor: Servicio de Administración Tributaria, buenas tardes, le atiende un asesor, ¿en qué puedo ayudarle?

[14:16:40] Contribuyente: Buenas tardes, soy persona física con actividad empresarial. Compré mobiliario para mi oficina, mi duda es: ¿Por cuantos años debo conservar esa factura para efectos fiscales? Muchas gracias

[14:18:14] Asesor ¿Puede permitirme un momento en línea por favor?, necesito revisar su consulta.

[14:20:59] Gracias por su amable tiempo de espera, en cuanto a su consulta le informo que por efectos fiscales el comprobante debe ser conservado por 5 años.

[14:21:04] Asesor: ¿Tiene alguna duda sobre la información que le proporcioné?

[14:23:33] Contribuyente: Ok, muchas gracias, ya no tengo más dudas. Buena tarde.

[14:23:41] Asesor: Gracias por utilizar los servicios del SAT, le atendió Asesor Hernández, que tenga un excelente día

Consulta número dos:

[14:18:08] Asesor: Servicio de Administración Tributaria, buenas tardes, le atiende un asesor, ¿En qué puedo ayudarle?

[14:18:12] Contribuyente: Buenas tardes, soy persona física con actividad empresarial. Compré mobiliario para mi oficina, mi duda es: ¿Por cuantos años debo conservar esa factura para efectos fiscales? Muchas gracias

[14:20:13] Asesor: Su gasto se deduce 10% anual. Debe conservar las facturas hasta que termine de deducir el gasto.

[14:21:13] ¿Tiene alguna duda de la información que le proporcione?

[14:22:42] Contribuyente: 10 años entonces ¿correcto?

[14:22:48] Asesor: Así es.

[14:23:15] Contribuyente: Ok, muchas gracias, ya no tengo más dudas. Buenas tardes

[14:23:25] Asesor: El SAT le agradece utilizar nuestros servicios, que tenga excelente tarde.

Consulta número tres:

Bienvenido al chat de SAT - Información Fiscal
“La información contenida en la presente conversación no crea obligaciones ni derechos distintos de los establecidos en las disposiciones fiscales”.

[15:19:44] Asesor: Servicio de Administración Tributaria, buenas tardes, le atiende un asesor, ¿En qué puedo ayudarle?

[15:19:46] Contribuyente: Buenas tardes, soy persona física con actividad empresarial. En 2007 comencé a depreciar un mobiliario y terminé de depreciarlo en 2016. ¿Debo conservar aún la factura por 5 años más, posteriores a la última depreciación que hice? es decir, ¿debo conservarla hasta 2021? Gracias

[15:20:36] Asesor: Claro ¿Puede permitirme un momento en línea por favor?, necesito revisar su consulta.

[15:22:57] Asesor: Gracias por esperar en línea, le sigo

atendiendo. ¿Puede permitirme un momento más por favor? Estoy revisando su consulta.

[15:25:17] Asesor: Gracias por esperar en línea, en cuanto a su consulta le comento que los datos de la contabilidad deben conservarse por un periodo de 5 años posteriores a la presentación de estos.

[15:26:23] Asesor: Disculpe, ¿Tiene alguna duda de la información que le proporcioné?

[15:26:58] Contribuyente: si, un segundo

[15:27:36] En este caso, son 5 años contados a partir del último año en que efectué la última depreciación?

[15:28:49] Asesor: Es correcto, como usted me menciona, si fue en 2016 el último pago el primer año finalizaría en 2017 y así sucesivamente.

[15:29:31] Contribuyente: ok, muchas gracias, ya no tengo más dudas. Buena tarde

[15:29:41] Asesor: El SAT le agradece utilizar nuestros servicios, que tenga una excelente tarde.

Resumen y palabras clave: a) 5 años, b) 10 años, c) La información contenida en la presente conversación no crea obligaciones ni derechos distintos de los establecidos en las disposiciones fiscales.

Décimo quinta referencia. Otra referencia más obtenida también del chat del Servicio de Administración Tributaria, donde se consultó un mismo tema a dos asesores diferentes, el mismo día y con solo unos minutos de diferencia.

Consulta número uno:

Bienvenido al chat de SAT - Información Fiscal
“La información contenida en la presente conversación no crea obligaciones ni derechos distintos de los establecidos en las disposiciones fiscales”.

[13:35:24] Asesor: Servicio de Administración Tributaria, buenas tardes, le atiende un asesor, ¿En qué puedo ayudarle?

[13:35:27] Contribuyente: Buenas tardes, Soy persona física con actividad empresarial, tengo un taller de ropa y 50 empleados, a ellos les proporciono servicio de transporte de personal, mi duda es ¿Ese transporte de personal se considera herramienta de trabajo? Muchas gracias

[13:36:40] Asesor: Disculpe, ¿Se refiere para hacerlo deducible?

[13:37:03] Contribuyente: Si

[13:38:17] Asesor: Le comento en este caso si se puede considerar una herramienta de trabajo y si lo podrá hacer deducible

[13:39:37] Asesor: ¿Tiene alguna duda de la información que le proporcioné?

[13:39:52] Contribuyente:
Ya no hay otra duda, muchas gracias y buenas tardes

[13:40:29] Asesor: El SAT agradece utilizar nuestros servicios que tenga buena tarde.

Consulta número dos:

Bienvenido al chat de SAT - Información Fiscal
“La información contenida en la presente conversación no crea obligaciones ni derechos distintos de los establecidos en las disposiciones fiscales”.

[13:32:57] Asesor: Servicio de Administración Tributaria, buenas tardes, le atiende un asesor, ¿En qué puedo ayudarle?

[13:33:44] Contribuyente: Buenas tardes, Soy persona física con actividad empresarial, tengo un taller de ropa y 50 empleados, a ellos les proporciono servicio de transporte de personal, mi duda es ¿Ese transporte de personal se considera

herramienta de trabajo? Muchas gracias

[13:41:48] Asesor: le comento que no es herramienta de trabajo es transporte de personal

[13:42:24] Asesor: Disculpe, ¿es una prestación que le da a todos los trabajadores?

[13:43:00] Contribuyente: Si

[13:43:46] Asesor: Le comento que el camión se considera equipo de transporte.

[13:44:55] Contribuyente: El autobús no es mío, es del proveedor y el proveedor me factura por transportar a mis empleados

[13:47:52] Asesor: Le comento que el transporte de personal no se considera herramienta de trabajo.

[13:49:24] Asesor: Le comento que el servicio de transporte de personal es un gasto deducible.

[13:50:06] Contribuyente: ok, ya no tengo más dudas. Buena tarde y muchas gracias

[13:50:16] Asesor: Gracias por utilizar los servicios del SAT, que tenga una buena tarde.

Resumen y palabras clave: a) transporte de personal, b) herramienta de trabajo.

Décimo sexta referencia. De la página de internet del Servicio de Administración Tributaria se obtiene la definición del término de garantía fiscal, el cual, transcrito de manera literal versa: “Es una obligación a cargo de los contribuyentes, para asegurar el cumplimiento de alguna obligación, como es el caso del pago de un crédito fiscal. Su propósito es que si usted no cubre el crédito fiscal, el Fisco se encuentre protegido y pueda cobrarse, haciendo efectivas las garantías otorgadas”.

Resumen y palabras clave: a) garantía fiscal, b) obligación a cargo de los contribuyentes, c) para asegurar el cumplimiento de alguna obligación, d) el fisco se encuentre protegido.

Décimo séptima referencia. Del Código Fiscal de la Federación aplicable al ejercicio 2017 se obtuvo la literalidad del artículo 141: La garantía deberá comprender, además de las contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios causados, así como de los que se causen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. Al terminar este período y en tanto no se cubra el crédito, deberá actualizarse su importe cada año y ampliarse la garantía para que cubra el crédito actualizado y el importe de los recargos, incluso los correspondientes a los doce meses siguientes. (...) En ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía.

Resumen y palabras clave: a) además de las contribuciones, b) actualizadas, c) accesorios, d) así como de los que se causen en los doce meses siguientes, e) recargos, f) en ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía.

Décima octava referencia. En México las deducciones para los asalariados son casi nulas por lo que no existe prácticamente conceptos que reduzca la base impositiva para este ramo, y son muy limitativas para los otros ramos marcados en la Ley del Impuesto sobre la Renta, tales como los Honorarios, Arrendamiento y Actividad Empresarial. En cambio, en los Estados Unidos de Norteamérica las deducciones están más enfocadas a atender las necesidades mínimas de los contribuyentes. En lo referente a las Personas Morales, en los Estados Unidos existe un mayor control, por lo que la defraudación fiscal por este sector es mínima. (Gutiérrez, 2002:262).

Resumen y palabras clave: a) en México las deducciones para los asalariados son casi nulas.

Décima novena referencia. De la página de internet de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) se obtuvo esta referencia que señala: ¿A quiénes defiende Prodecon mediante el servicio de Representación Legal y Defensa? Prodecon representa y defiende gratuitamente a las personas físicas, personas morales, obligados solidarios o terceros que se vean afectados por actos o resoluciones emitidos por autoridades fiscales federales, incluso de las coordinadas en las entidades federativas, así como organismos fiscales autónomos, tales como el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, cuando el monto del asunto o de los créditos fiscales (sin contar actualizaciones, accesorios y multas) no excedan de 30 veces el salario mínimo vigente en la Ciudad de México (ahora Unidad de Medida y Actualización “UMA”) elevado al año (\$826,615.50 para 2017).

Resumen y palabras clave: a) Prodecon representa y defiende, b) no excedan de 30 veces el salario mínimo.

Vigésima referencia. A continuación, se transcriben tres consultas vía chat con el SAT referentes a la asesoría de un cálculo en específico, ambos el mismo día con diferencia de minutos, dos de ellas en un sentido y una tercera en sentido contrario.

Primera consulta. Bienvenido al chat de SAT -
Información Fiscal
“La información contenida en la presente conversación no crea obligaciones ni derechos distintos de los establecidos en las

disposiciones fiscales”.

[09:32:10] Asesor: Servicio de Administración Tributaria buenos días, le atiende un asesor del SAT ¿En qué puedo ayudarle?

[09:32:14] Contribuyente: Buenos días, soy una persona moral de nueva creación y estoy calculando el impuesto de la primera nómina de uno de mis trabajadores, pero tengo duda en su cálculo ¿podría por favor ayudarme a confirmar que esté correcto de acuerdo a ISR y no cometer errores en el pago del impuesto? Ingresos semanales de 2,000, menos límite inferior de $1,950.89 = 19.41 \times 17.92\% = 3.48$ más cuota fija de $181.09 = 184.57$. Muchas gracias

[09:33:43] Asesor: ¿Puede permitirme un momento por favor? Voy a verificar su consulta

[09:36:23] Asesor: Gracias por esperar, para brindarle la información que necesita, lo voy a transferir con otro asesor, por favor permítame un momento.

[09:38:38] Asesor: Servicio de Administración Tributaria, buen día. Le atiende un asesor del SAT. ¿Me puede permitir un momento para revisar su consulta, por favor?

[09:41:30] Asesor: De acuerdo a las políticas de uso del Chat uno a uno en la conversación de Chat no se realiza cálculo de impuestos ni llenado de formatos.

[09:42:57] Asesor: ¿Le puedo ayudar en algo más respecto a su consulta inicial?

[09:43:24] Contribuyente: No, ya es todo, muchas gracias y buen día

[09:43:44] Asesor: Estamos para servirle, el SAT le agradece utilizar nuestros servicios, que tenga un excelente día.

Resumen y palabras clave: a) de acuerdo a las políticas de uso del Chat uno a uno en la conversación de Chat no se realiza cálculo de impuestos ni llenado de formatos.

Segunda consulta. Bienvenido al chat de SAT - Información Fiscal
“La información contenida en la presente conversación no crea obligaciones ni derechos distintos de los establecidos en las disposiciones fiscales”.

[09:07:34] Asesor: Servicio de Administración Tributaria, buenos días, le atiende un asesor del SAT?, ¿en qué puedo ayudarle?

[09:08:10] Contribuyente : Buenos días, soy una persona moral de nueva creación y estoy calculando el impuesto de la primer nómina de uno de mis trabajadores pero tengo duda en su cálculo ¿podría por favor ayudarme a confirmar que esté correcto de acuerdo a ISR y no cometer errores en el pago del impuesto? Ingresos semanales de 2,000, menos límite inferior de $1,950.89 = 19.41 \times 17.92\% = 3.48$ más cuota fija de $181.09 = 184.57$. Muchas gracias

[09:09:45] Asesor: ¿Me puede permitir un momento en línea por favor?, necesito revisar su consulta.

[09:12:53] Asesor: Gracias por esperar, para brindarle la información que necesita, lo voy a transferir con otro asesor, por favor permítame un momento, gracias

[09:15:11] Asesor: Servicio de Administración Tributaria, buen día. Le atiende un asesor del SAT. ¿Puede permitirme un momento por favor?, vamos a revisar su consulta.

[09:19:56] Asesor: Le agradezco el tiempo en espera, le informo que para determinar el impuesto es considerar el total de ingresos menos ingresos exentos, el resultado es la base del impuesto a la cual le resta el límite inferior (el monto de límite inferior por periodo semanal, quincenal u mensual lo puede verificar en el anexo 8 de la RMF para 2017), al excedente del límite inferior le aplica el porcentaje sobre el excedente del límite inferior, el resultado es el impuesto marginal al cual le suma la cuota fija y el resultado es el impuesto determinado.

[09:20:55] Asesor: En su caso usted deberá verificar si siguió este procedimiento para determinar su cálculo, ya que por políticas de uso de chat, nosotros no podríamos indicarle si el cálculo es correcto.

[09:22:08] Contribuyente: ¿Entonces no podrían revisar mi cálculo para validar si estoy aplicando las tarifas y procedimiento correctos, de acuerdo con mis datos que les comenté arriba? Gracias

[09:22:40] Asesor: No podría indicarle si el cálculo es correcto, ya que por políticas de uso de chat no se brinda ese servicio.

[09:23:34] Asesor: Únicamente puedo brindarle el procedimiento e indicarle que el monto de límite inferior, cuota fija y el por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior es correcto conforme a la tarifa semanal del anexo 8.

[09:25:11] Contribuyente: Ok. Entonces ya no tengo más dudas. Muchas gracias y buen día

[09:25:26] Asesor: Al contrario, gracias por comunicarse. El SAT le agradece utilizar nuestros servicios, que tenga un excelente día.

Resumen y palabras clave: a) no podría indicarle si el cálculo es correcto, ya que por políticas de uso de chat no se brinda ese servicio, b) deberá verificar si siguió este procedimiento para determinar su cálculo, ya que, por políticas de uso de chat, nosotros no podríamos indicarle si el cálculo es correcto.

Tercera consulta: [09:46:27] Asesor: Servicio de Administración Tributaria, buenos días, le atiende Un asesor del SAT, ¿En qué puedo ayudarle?

[09:48:01] Contribuyente: Buenos días, soy una persona moral de nueva creación y estoy calculando el impuesto de la primer nómina de uno de mis trabajadores pero tengo duda en su

cálculo. Ingresos semanales de 2,000, menos límite inferior de $1,950.89 = 19.41 \times 17.92\% = 3.48$ más cuota fija de $181.09 = 184.57$. Hay muchas tablas y tarifas en las disposiciones fiscales y quiero ver si me ayuda con dos dudas: ¿El cálculo es correcto en base a las tarifas que le deben aplicar? y, 2: ¿El proceso es correcto de acuerdo a disposiciones fiscales aplicables? Muchas gracias

[09:50:13] Asesor: ¿Puede permitirme un momento en línea por favor? Necesito revisar su consulta.

[09:51:16] Asesor: Gracias por su espera en línea, para brindarle la información que necesita, lo voy a transferir a la campaña de nueva factura, permítame un momento por favor.

[09:55:09] Asesor: Servicio de Administración Tributaria, buenos días le atiende Anahí Acevedo, ¿En qué puedo ayudarle?

[09:57:31] Contribuyente: Buenos días, soy una persona moral de nueva creación y estoy calculando el impuesto de la primera nómina de uno de mis trabajadores, pero tengo duda en su cálculo. Ingresos semanales de 2,000, menos límite inferior de $1,950.89 = 19.41 \times 17.92\% = 3.48$ más cuota fija de $181.09 = 184.57$. Hay muchas tablas y tarifas en las disposiciones fiscales y quiero ver si me ayuda con dos dudas: ¿El cálculo es correcto en base a las tarifas que le deben aplicar? y, 2: ¿El proceso es correcto de acuerdo a disposiciones fiscales aplicables? Muchas gracias

[09:58:36] Asesor: ¿Puede permitirme un momento en línea por favor?, necesito revisar su consulta.

[10:00:36] Asesor: Gracias por su amable tiempo en espera, para brindarle la información que necesita, lo voy a transferir con otro asesor, por favor permítame un momento, gracias.

Asesor: Bienvenido al chat de SAT - Información Fiscal
“La información contenida en la presente conversación no crea obligaciones ni derechos distintos de los establecidos en las disposiciones fiscales”.

[10:02:01] Asesor: Servicio de Administración Tributaria, buen día, le atiende un asesor, ¿en qué puedo ayudarle?

[10:02:17] Contribuyente: Buenos días, soy una persona moral de nueva creación y estoy calculando el impuesto de la primer nómina de uno de mis trabajadores pero tengo duda en su cálculo. Ingresos semanales de 2,000, menos límite inferior de $1,950.89 = 19.41 \times 17.92\% = 3.48$ más cuota fija de 181.09 = 184.57. Hay muchas tablas y tarifas en las disposiciones fiscales y quiero ver si me ayuda con dos dudas: ¿El cálculo es correcto en base a las tarifas que le deben aplicar? y, 2: ¿El proceso es correcto de acuerdo a disposiciones fiscales aplicables? Muchas gracias

[10:04:48] Asesor: ¿Usted está utilizando la tabla del artículo 96 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente?

[10:05:02] Asesor: ¿O bien las que contiene el Anexo 8 de Resolución Miscelánea Fiscal 2017?

[10:07:47] Asesor: Le proporciono la mecánica de cálculo.

[10:08:46] Ingreso (-) Exento (=) Base de impuesto

[10:08:51] (-) Límite inferior

[10:08:57] (=) Excedente sin límite inferior

[10:09:06] (x) Porcentaje de impuesto

[10:09:11] (=) Impuesto marginal

[10:09:26] (+) Cuota fija

[10:09:39] (=) ISR determinado conforme a tarifa

[10:10:33] Asesor: De acuerdo a lo que me indico anteriormente usted si esta utilizando esta mecánica de cálculo por lo cual es correcto la mecánica de calculo que utiliza para el cálculo para retención de ISR mensual.

[10:11:36] Asesor: Disculpe, ¿usted tiene alguna duda de la información que le proporcioné?

[10:11:51] Contribuyente: Perfecto. ya no tengo más dudas. Muchas gracias y buen día

[10:12:05] Asesor: El SAT le agradece utilizar nuestros servicios, que tenga buen día

Resumen y palabras clave: a) de acuerdo a lo que me indicó anteriormente usted si está utilizando esta mecánica de cálculo por lo cual es correcto la mecánica de cálculo que utiliza para el cálculo para retención de ISR mensual.

Vigésima primera referencia. A transcripción literal de publicación efectuada por la Prodecon en su página de internet www.prodecon.gob.mx en el año 2016, a través del titular de la dependencia en Durango, Héctor Peña Herrera, refirió:

A lo largo del presente año la delegación Durango de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) ha brindado dos mil 580 atenciones, entre asesorías, trámites, quejas, solicitudes de representación legal y defensa, además de solicitudes de acuerdos conclusivos con las autoridades fiscales.

Al informar lo anterior, el titular de la dependencia en mención, Héctor Peña Herrera, refirió que la mayor parte de las atenciones son por asesorías, con un total de dos mil.

Al tercer trimestre de 2016, el 90 por ciento de las quejas se resolvieron favorablemente, desde que se inauguró la dependencia, en julio de 2013. De estas, el 95 por ciento se resolvió a favor del contribuyente, es decir, casi la totalidad.

Resumen y palabras clave: a) el 95 por ciento se resolvió a favor del contribuyente, es decir, casi la totalidad, b) trámites, quejas, solicitudes de representación legal y defensa.

Vigésima segunda referencia. De la serie de cuadernos de la procuraduría de la Defensa del Contribuyente, precisamente del número I, titulado “Panorama de la situación

de los contribuyentes en México” se obtuvo la siguiente referencia:

La complejidad de las normas tributarias, origina interpretaciones divergentes sobre su contenido, alcance y aplicación, generando numerosas controversias y propiciando la inseguridad Jurídica de los contribuyentes.

Nuestro sistema tributario no reconoce Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC). La consulta prevista en el artículo 34 del CFF es la única vía que se prevé para que el causante conozca el criterio de la autoridad respecto de un asunto real y concreto y con ello pueda evitar futuras controversias que le originen altos costos.

Actualmente las consultas, con la reforma sufrida por el citado artículo 34 en el 2007, ya no vinculan a los contribuyentes, pues el texto legal dispone expresamente que no serán impugnables, lo que restó efectividad a la figura, ya que a partir de la modificación legal disminuyó considerablemente la presentación de consultas.

Representa lo anterior un grave retraso en la relación jurídico tributaria, pues en lugar de avanzar para lograr la interacción eficaz entre los contribuyentes y la autoridad fiscal en vistas a la conciliación de sus legítimos intereses antes de la generación de la controversia, se está actualmente en el polo opuesto, pues no existe medio alguno que permita la adopción de cualquier especie de “acuerdo previo” entre Fisco y los contribuyentes.

Como consecuencia se ha judicializado toda controversia o diferendo entre las partes, con lo gravoso que esto resulta debido a los altos costos tanto para los contribuyentes como para la

autoridad, el largo tiempo que normalmente dura la controversia y la inseguridad e incertidumbre jurídicas que ello conlleva, esto sin mencionar que los créditos fiscales son objeto de actualización permanente y que traen aparejada ejecución, a menos de que se otorgue la garantía respectiva. (2011:10).

Resumen y palabras clave: a) la complejidad de las normas tributarias, b) origina interpretaciones divergentes, c) generando numerosas controversias, d) propiciando la inseguridad jurídica de los contribuyentes, e) la consulta es la única vía que se prevé para que el causante conozca el criterio de la autoridad respecto de un asunto real y concreto y con ello pueda evitar futuras controversias, f) disminuyó considerablemente la presentación de consultas, g) representa lo anterior un grave retraso en la relación jurídico tributaria, h) gravoso que esto resulta debido a los altos costos tanto para los contribuyentes como para la autoridad, i) largo tiempo que normalmente dura la controversia, j) la inseguridad e incertidumbre jurídicas que ello conlleva.

Vigésima tercera referencia. De la misma referencia previa (vigésima primera), pero en su primera página se señala:

Cumplir con las obligaciones que la ley establece para los pagadores de impuestos en México no es tarea fácil; la excesiva y compleja regulación dificulta la determinación y entero de las contribuciones, implicando altos costos y constituyéndose en un factor de desaliento en el cumplimiento.

Cumplir con las disposiciones tributarias adecuada y oportunamente requiere instrumentar una contabilidad especial para efectos fiscales, con adición a la financiera; controlar sus ingresos con base a flujo de efectivo para calcular el Impuesto al valor agregado y el Impuesto empresarial a tasa única y con base

a devengado para el Impuesto sobre la renta; cumplir con requisitos adicionales para hacer efectivas las deducciones; presentar numerosas declaraciones provisionales, anuales e informativas; así como integrar una estructura informática mínima para emitir la facturación electrónica y, en su caso, retener y enterar impuestos de terceros, amén de dictaminar cuando proceda sus estados financieros para efectos fiscales por contador público registrado.

Por Otra parte, la publicación elaborada por el Banco Mundial, la International Finance Corporation y PriceWaterHouseCoopers International, basada en los resultados obtenidos del de "Doing Business 2011 del Banco Mundial", que abarca el estudio de los sistemas fiscales de 183 países en el periodo de 2004 a 2010, muestra el impacto que en los negocios ocasiona el costo de los impuestos y las cargas para cumplir con las obligaciones fiscales, de esta publicación se desprende que México una compleja carga administrativa por el lugar en que se ubica en el comparativo con las otras economías que incluye dicho estudio, como puede observarse en el siguiente cuadro:

| Concepto | Lugar que |
|---------------------------------|------------------|
| ocupa México | |
| Facilidad de pago de impuestos | 107 |
| Número de impuestos a pagar | 7 |
| Tiempo para cumplir con el pago | 155 |
| Tasa total de impuestos | 138 |

Resumen y palabras clave: a) excesiva y compleja regulación dificulta la determinación y entero de las contribuciones, b) es un factor de desaliento en el cumplimiento, c) México es una compleja carga administrativa, d) México se encuentra en el lugar 107 de 183 países en cuanto a facilidad de pago de impuestos.

Vigésima cuarta referencia. En una encuesta realizada por el SAT a 1,600 ciudadanos acerca de las causas por las que en México las personas no pagan impuestos, se obtuvo que los motivos son: i) porque es muy difícil, ii) por que no pasa nada si no se paga, iii) porque si se paga, el Gobierno se lo roba o no lo usa correctamente, y iv) porque no existe una cultura de contribuir. (Prodecon, 2011:3).

Resumen y palabras clave: a) las causas por las que en México las personas no pagan impuestos, b) porque es muy difícil.

Vigésima quinta referencia. Actualmente coexisten diversas formas de interpretación de la norma fiscal, ya que en algunos precedentes judiciales se ha llegado a considerar que es preferente el contenido sustancial y económico incluso sobre las mismas expresiones formales y literales de la norma. Debe recordarse que la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados ha rechazado diversas propuestas para modificar el artículo 5 del CFF, las cuales incluían precisamente el principio denominado "preeminencia del fondo sobre la forma"; lo que es obligado preguntarse hasta qué grado son válidas interpretaciones judiciales que acogen un principio que no sólo se está incorporado en nuestra legislación, sino que fue expresamente rechazado por el órgano legislativo.

Este tipo de interpretación novedosa coexiste con exégesis ortodoxas que se circunscriben texto de la ley y su contenido literal, junto con otras más equilibradas que toman en cuenta métodos tradicionales de tales como atender a la intención del legislador, así como a la interpretación sistemática de la norma no sólo dentro de la ley que la contiene sino en relación con todo

La falta de uniformidad en los métodos utilizados para interpretar la norma fiscal obra en perjuicio de los contribuyentes ya que genera inseguridad jurídica, pues el tipo de método interpretativo utilizado puede llegar a si la norma se aplica en un sentido o en otro.

Resumen y palabras clave: a) en algunos precedentes judiciales se ha llegado a considerar que es preferente el contenido sustancial y económico incluso sobre las mismas expresiones formales y literales de la norma, b) preeminencia del fondo sobre la forma, obra en perjuicio de los contribuyentes ya que genera inseguridad jurídica, c) el contribuyente debe contar con la debida seguridad y certeza jurídicas para establecer con el menor margen de duda la forma y términos en que debe tributar.

Artículo 2o.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

I. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas.

IX. Derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa.

Artículo 5o.- Las autoridades fiscales deberán prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos y obligaciones en materia fiscal. Asimismo, y sin perjuicio de lo que dispone el Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales deberán publicar los textos actualizados de las normas tributarias en sus páginas de Internet, así como contestar en forma oportuna las consultas tributarias.

Artículo 7o.- Las autoridades fiscales tendrán la obligación de publicar periódicamente instructivos de tiraje masivo y comprensión accesible, donde se den a conocer a los contribuyentes, de manera clara y explicativa, las diversas formas de pago de las contribuciones.

Resumen y palabras clave: a) derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales, b) derecho a que las actuaciones de las autoridades fiscales que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que les resulte menos onerosa, c) Las autoridades fiscales deberán prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos y obligaciones en materia fiscal, d) contestar en forma oportuna las consultas tributarias, e) de comprensión accesible, f) de manera clara y explicativa.

Vigésima séptima referencia. La Prodecon, en su informe anual 2014 señaló: Esta Procuraduría, a través del procedimiento de queja, se percató que la autoridad incluyó en dicho listado a contribuyentes que, al ser buscados para verificar su domicilio, supuestamente no fueron encontrados, sin que se acreditara que, en efecto, no existía el domicilio del contribuyente; es decir, que no era posible su localización en dicho domicilio, tal fue el caso de un pagador de impuestos que vivía en un conjunto habitacional de acceso restringido, y al pretender la autoridad

verificar su domicilio, el vigilante señaló que en ese momento el contribuyente no se encontraba y que él no estaba autorizado para recibir documentación a nombre de los condóminos; razón por la cual el notificador hizo constar que el pagador de impuestos se encontraba "no localizado". Con base en ello, la autoridad determinó incluirlo en el listado mencionado.

Así, la Procuraduría detectó que contribuyentes cumplidos y, en algunos casos, asalariados al corriente con sus obligaciones, eran incluidos en estas listas, por el simple hecho de no haber sido localizados en un momento determinado en su domicilio fiscal declarado ante el SAT, situación que este Ombudsman consideró irregular y fuera del espíritu de la norma, por lo que emprendió acciones encaminadas a lograr la eliminación de este tipo de contribuyentes de la lista del artículo 69 del CFF.

Atendiendo a las sugerencias de esta Procuraduría, el SAT eliminó del listado a los contribuyentes

Resumen y palabras clave: a) contribuyentes cumplidos y, en algunos casos, asalariados al corriente con sus obligaciones, eran incluidos en estas listas, b) situación que este Ombudsman consideró irregular y fuera del espíritu de la norma.

Vigésima octava referencia. La página de internet de la cámara de diputados, al 29 de enero del 2018, enlista distintas normativas, dentro de las que destacan:

Existen 295 leyes federales, dentro de las cuales se indican, a manera enunciativa la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, ley para la depuración y liquidación de cuentas de la hacienda pública federal, ley para el uso y la protección de la denominación y el emblema de la cruz roja, ley

general para la atención y protección a personas con la condición de espectro autista, ley federal de zonas económicas especiales, ley federal de datos personales en posesión de los particulares, ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, ley federal de consulta popular, ley federal de archivos, ley en favor de los veteranos de la revolución como servidores del Estado, ley del sistema de horario en los Estados Unidos Mexicanos, ley de recompensas de la armada de México, ley de premios, estímulos y recompensas civiles, ley de fomento para la lectura y el libro, ley de ascensos y recompensas del ejército y fuerza aérea mexicanos, ley de ascensos de la armada de México, estatuto de las Islas Marías, entre otros.

La misma referencia indica 129 reglamentos, a la misma fecha.

Además, en la misma página de internet se enlistan los ordenamientos de cada Estado, por ejemplo, tan solo el estado de Durango tiene 158.

En adición a lo ya señalado, la página de Gobernación www.gob.mx indica que: México cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países (TLCs), 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI) con 33 países y 9 acuerdos de alcance limitado (Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial) en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Cabe señalar que también existen publicaciones diarias de fuentes como el Diario Oficial de la Federación, periódicos oficiales de los estados, amén de otras normatividades como NOMs, entre otros.

Resumen y palabras clave: a) existencia de leyes cuyo nombre no es común escucharlo, b) existen miles de normatividades en México.

Vigésima novena referencia. De la Real Academia Española:

Esclavo, va

1. adj. Dicho de una persona: Que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra.

2. adj. Sometido rigurosa o fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio, etc., que priva de libertad. Hombre esclavo de su palabra. U. m. c. s.

3. adj. Rendido, obediente, enamorado. U. m. c. s.

4. adj. Dicho de una actividad: Que exige mucho trabajo, atención y cuidado. El deporte de competición es muy esclavo.

5. m. y f. Persona alistada en alguna cofradía de esclavitud.

6. f. Pulsera sin adornos y que no se abre.

7. f. El Salv. y Hond. Pulsera grande que puede abrirse.

8. f. Ur. Pulsera rígida, circular o poligonal, que puede llevar dijes y que no tiene cierre.

Riguroso, sa.

De riguroso.

1. adj. Áspero y acre.

2. adj. Muy severo, cruel.

3. adj. Estrecho, austero, rígido.

4. adj. Dicho de un temporal o de una desgracia u otro mal: Extremado, duro de soportar.

5. adj. Exacto, preciso, minucioso.

Extremado, da.

Del part. de extremar.

1. adj. Exagerado, excesivo.
2. adj. Sumamente bueno o malo en su género.
3. f. pl. Entre ganaderos, tiempo en que están ocupados en hacer el queso.

Minucioso, sa.

1. adj. Que se detiene en las cosas más pequeñas.

Resumen y palabras clave: a) sometido rigurosa o fuertemente a un deber, etc., b) muy severo, c) extremado, d) exagerado, e) excesivo, f) contravención desenfrenada de las leyes y buenas costumbres.

Trigésima referencia. Artículo 14 Constitucional. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.

En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Artículo 16 Constitucional. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en

virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Resumen y palabras clave: a) que funde y motive la causa legal, b) se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, c) queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley, d) en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Trigésima primera referencia. El principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho; más aún, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual, a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de forma y fondo consignados en la Constitución.

Su respeto o su inobservancia marcan la diferencia entre un estado democrático o aquel que se distingue por ser autoritario.

El respeto a la legalidad ha sido requisito indispensable para la consolidación de nuestra vida democrática.

CotiAsesormente el que la autoridad cualquiera que sea sujete su actuar con observancia de la norma legal preestablecida, es una causa que adquiere mayor relevancia. En este sentido sociedad y gobierno han ido perfeccionando los instrumentos jurídicos que impiden el desbordamiento de los actos de autoridad.

El Estado no está por encima de la Nación, aunque exista el reconocimiento que fue primero aquel que ella.

La máxima jurídica que establece que el primero en tiempo es primero en derecho, no opera en este asunto. El Estado está el servicio de la nación y no a la inversa y la nación la comprendemos y le damos vida todos los ciudadanos que definitiva o transitoriamente nos encontramos en ella, y que, por este sólo hecho, gozamos de las garantías que otorga la Constitución. (Yee, 2007:1).

Resumen y palabras clave: a) todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual, a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de forma y fondo consignados en la Constitución, b) El respeto a la legalidad ha sido requisito indispensable para la consolidación de nuestra vida democrática, c) sociedad y gobierno han ido perfeccionando los instrumentos jurídicos que impiden el desbordamiento de los actos de autoridad, d) el Estado no está por encima de la Nación, aunque exista el reconocimiento que fue primero aquel que ella. e) El Estado está el servicio de la nación y no a la inversa y la nación la comprendemos y le damos vida todos los ciudadanos.

Trigésima segunda referencia. Tabla preparada con información obtenida de la página de Prodecon:
www.prodecon.gob.mx.

ESCLAVISMO MEXICANO: UN ESTADO DE INDEFENSIÓN E INCERTIDUMBRE JURÍDICA

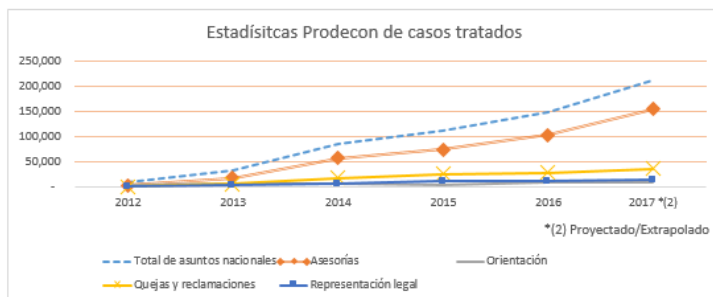
Resumen de estadísticas históricas Prodecon de asuntos tratados¹

| | <u>2012</u> | <u>2013</u> | <u>2014</u> | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> ^{*(1)} |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|
| Total de asuntos nacionales | 7,753 | 31,182 | 85,501 | 112,664 | 148,098 | 172,097 |
| Asesorías | 2,986 | 17,389 | 56,141 | 73,595 | 102,525 | 125,052 |
| Orientación | 3,989 | 5,611 | 6,201 | 4,573 | 7,398 | 7,126 |
| Quejas y reclamaciones | 431 | 5,407 | 17,683 | 24,455 | 27,936 | 29,122 |
| Representación legal | 347 | 2,775 | 5,476 | 10,041 | 10,239 | 10,797 |

^{*(1)} Al 23 de octubre 2017

Gráfica 1

Resumen de estadísticas históricas Prodecon de asuntos tratados ²



Trigésima tercera referencia. Tesis jurisprudencial Época: Décima Época

¹ Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la página de internet de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). www.prodecon.gob.mx

² Fuente: Elaboración propia con información obtenida de la página de internet de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). www.prodecon.gob.mx

Registro: 2015246

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Publicación: viernes 06 de octubre de 2017 10:16 h

Materia(s): (Constitucional, Administrativa)

Tesis: 2a./J. 140/2017 (10a.)

PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA FISCAL. SU CONTENIDO ESENCIAL.

Dicho principio constituye uno de los pilares sobre el cual descansa el sistema fiscal mexicano y tutela que el gobernado no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial del principio de seguridad jurídica en materia fiscal radica en poder tener pleno conocimiento sobre la regulación normativa prevista en la ley y sobre sus consecuencias. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio aludido se pueden compendiar en la certeza en el derecho y en la interdicción de la arbitrariedad; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, esto es, que tenga un desarrollo suficientemente claro, sin ambigüedades o antinomias, respecto de los elementos esenciales de la contribución y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones de las normas; y la segunda, principal, mas no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa.

SEGUNDA SALA

Amparo en revisión 441/2015. Smart & Final del Noroeste, S.A. de C.V. y otra. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez

Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo en revisión 845/2015. Tiendas Aurrerá, S. de R.L. de C.V. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo en revisión 876/2015. Desarrollo Comercial Abarrotero, S.A. de C.V. y otras. 25 de enero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó en contra de consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Contradicción de tesis 59/2017. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, Primero y Segundo del Trigésimo Circuito y Décimo Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito. 12 de julio de 2017. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo en revisión 478/2017. Patricia Guadalupe López Araujo. 30 de agosto de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Javier Laynez Potisek. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Tesis de jurisprudencia 140/2017 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del trece de septiembre de dos mil diecisiete.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de octubre de 2017 a las 10:16 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de octubre de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Resumen y palabras clave: a) sistema fiscal mexicano y tutela que el gobernado no se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión, b) radica en poder tener pleno conocimiento sobre la regulación y sobre sus consecuencias, c) certeza, d) suficientemente claro, e) sin ambigüedades, f) respecto de los elementos esenciales de la contribución, g) certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones de las normas, h) a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa.

Trigésima cuarta referencia. Tesis aislada

Época: Décima Época

Registro: 2013881

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II
Materia(s): Constitucional
Tesis: 2a. XXXVII/2017 (10a.)
Página: 1385

**CONFIANZA LEGÍTIMA. CONSTITUYE UNA
MANIFESTACIÓN DEL DERECHO A LA SEGURIDAD
JURÍDICA, EN SU FACETA DE INTERDICCIÓN DE LA
ARBITRARIEDAD.**

El derecho a la seguridad jurídica, reconocido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión; su esencia versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse" respecto del contenido de las leyes y de la propia actuación de la autoridad. Sin embargo, no debe entenderse en el sentido de que el orden jurídico ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el correlativo derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. De lo anterior, puede considerarse la confianza legítima como una manifestación del derecho a la seguridad jurídica, en su faceta de interdicción o prohibición de la arbitrariedad o del exceso, en virtud de la cual, en el caso de que la actuación de los poderes públicos haya creado en una persona interesada confianza en la estabilidad de sus actos, éstos no pueden modificarse de forma imprevisible e intempestiva, salvo el supuesto en que así lo exija el interés público. Al respecto, cabe precisar que, atendiendo a las características de todo Estado democrático, la confianza legítima

adquiere diversos matices dependiendo de si se pretende invocar frente a actos administrativos o actos legislativos.

Amparo en revisión 894/2015. Aguilares, S. de P.R. de R.L. y otra. 5 de octubre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.

Amparo en revisión 670/2015. Bachoco, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.

Amparo en revisión 914/2015. Granjas Ojai, S.A. de C.V. y otra. 8 de febrero de 2017. Cinco votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Eduardo Medina Mora I.; votó con salvedad Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Joel Isaac Rangel Agüeros.

Esta tesis se publicó el viernes 10 de marzo de 2017 a las 10:13 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Resumen y palabras clave: a) derecho a la seguridad jurídica, b) incertidumbre jurídica, c) estado de indefensión, d) su esencia versa en "saber a qué atenerse", e) la autoridad no incurra en arbitrariedades, f) prohibición de la arbitrariedad o del exceso.

Trigésima quinta referencia. Tesis jurisprudencial

Época: Décima Época

Registro: 2002649

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a./J. 139/2012 (10a.)

Página: 437

**SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA.
EN QUÉ CONSISTE.**

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la República, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Así, en materia tributaria debe destacarse el relevante papel que se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de razón ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual (objetivo) de todos ante la ley, frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un punto de vista positivo, la importancia de la ley como vehículo generador de certeza, y desde un punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta forma, las manifestaciones

concretas del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente desarrollo y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones del ordenamiento; y, la segunda, principal, más no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa, por lo que la existencia de un ordenamiento tributario, partícipe de las características de todo ordenamiento jurídico, es producto de la juridificación del fenómeno tributario y su conversión en una realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá un sistema de seguridad jurídica formal o de "seguridad a través del Derecho".

Amparo en revisión 820/2011. Estación de Servicios Los Álamos, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 251/2012. Maquilas y Detallistas, S.A. de C.V. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 686/2012. Incomer, S.A. de C.V. 25 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 1073/2012. Gold Medal Construction, S.A. de C.V. 27 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 416/2012. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 8 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.

Tesis de jurisprudencia 139/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintiuno de noviembre de dos mil doce.

Resumen y palabras clave: a) el relevante papel que se concede a la Ley b) como instrumento garantizador de un trato igual, c) la importancia de la ley como vehículo generador de certeza, d) como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado, e) tal ordenamiento público constituirá un sistema de seguridad jurídica formal o de "seguridad a través del Derecho".

Trigésima sexta referencia. Tesis aislada

Época: Novena Época

Registro: 182603

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XVIII, Diciembre de 2003

Materia(s): Administrativa

Tesis: I.4o.A.409 A

Página: 1413

LEYES. INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS QUE ESTABLECEN SANCIONES ADMINISTRATIVAS, PERO NO PREVEN LAS INFRACCIONES QUE LAS PUEDEN ORIGINAR.

Si una ley señala cuáles son las sanciones administrativas que se pueden imponer por violaciones a la misma, a sus

reglamentos y demás disposiciones que de ella emanen, pero no prevé el supuesto sancionado o "tipo", es decir, la descripción de la conducta o hecho infractor de los que dependa la sanción, implica que el legislador está delegando su función -tipificar la infracción- a la autoridad administrativa. Leyes de este tipo, conocidas en la doctrina como "leyes en blanco" o "leyes huecas" resultan inconstitucionales en virtud de que violentan, por una parte, la garantía de exacta aplicación de la ley (nullum crimen, nulla poena sine lege) consagrada en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional (aplicable tratándose de infracciones y sanciones administrativas dada su identidad ontológica con la materia penal), en la medida en que crean una situación de incertidumbre jurídica y estado de indefensión para el gobernado porque la autoridad que aplica la ley, al contar con la posibilidad de determinar la infracción ante la omisión destacada, será proclive a la arbitrariedad y no al ejercicio reglado, máxime si el legislador tampoco especifica los fines o valores que den cauce a la discrecionalidad de aquélla y, por la otra, la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, pues permiten que el gobernado quede en un estado de ignorancia respecto del fundamento y los motivos por los que puede hacerse acreedor a una de las sanciones.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 254/2003. Pemex, Exploración y Producción. 1o. de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.

Resumen y palabras clave: a) no prevé el supuesto sancionado, es decir, la descripción de la conducta o hecho infractor de los que dependa la sanción, b) implica que el

legislador está delegando su función -tipificar la infracción- a la autoridad administrativa, c) . “leyes huecas” resultan inconstitucionales, d) violentan la garantía de exacta aplicación de la ley, e) crean una situación de incertidumbre jurídica y estado de indefensión, f) el gobernado quede en un estado de ignorancia respecto del fundamento y los motivos por los que puede hacerse acreedor a una de las sanciones.

Trigésima séptima referencia. Tesis aislada.

Época: Novena Época

Registro: 189220

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XIV, Agosto de 2001

Materia(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: 1a. LX/2001

Página: 167

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. LA SANCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 99 DE LA LEY QUE REGULA LA PRESTACIÓN DE ESE SERVICIO PÚBLICO EN EL ESTADO DE COLIMA, PARA LOS USUARIOS QUE INCUMPLAN CON EL PAGO DE LOS DERECHOS RESPECTIVOS, TRANSGREDE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADAS EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

La circunstancia de que el artículo 99 de la Ley para regular la prestación del servicio público de agua potable, alcantarillado y saneamiento para el Estado de Colima, faculte a los organismos operadores o, en su defecto, a la comisión estatal

para realizar las acciones necesarias tendientes a impedir, obstruir o cerrar la posibilidad de descargar aguas residuales a las redes de drenaje y alcantarillado, a aquellos usuarios que incumplan con el pago respectivo conforme a lo dispuesto en la propia ley, transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica. Lo anterior es así, porque el citado artículo 99 no precisa el número de pagos mínimos que los usuarios del citado servicio deben incumplir para que se les aplique dicha sanción, generándose con ello una situación de incertidumbre, al dejar a la voluntad de la autoridad el determinar el momento en que debe imponerse al particular tal sanción; ni tampoco prevé las circunstancias que en cada caso concreto posibiliten a la autoridad correspondiente para imponerla, esto es, la gravedad de la infracción, la reincidencia en la comisión del hecho que la motiva, o cualquier otro elemento que tienda a individualizarla. Además, al no señalarse con precisión en el mencionado artículo 99 cuáles son todas las acciones que se estiman necesarias para impedir, obstruir o cerrar la posibilidad de descargar las aguas residuales a las redes de drenaje y alcantarillado, se deja en estado de indefensión a los usuarios del servicio de que se trata, pues desconocen los alcances de la ejecución de la referida sanción.

Amparo en revisión 1756/99. José Luis Jiménez Morales.
24 de mayo de 2000. Cinco votos. Ponente: José de Jesús
Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.

Resumen y palabras clave: a) la Ley, b) faculta a los organismos operadores, c) para realizar las acciones necesarias tendientes a impedir, obstruir o cerrar la posibilidad de descargar aguas, d) a aquellos usuarios que incumplan con el pago, e) transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica, f) el citado artículo 99 no precisa el número de pagos mínimos que los usuarios del citado servicio deben incumplir

para que se les aplique dicha sanción, g) dejar a la voluntad de la autoridad el determinar el momento en que debe imponerse al particular tal sanción, h) la gravedad de la infracción, i) la reincidencia

Trigésima octava referencia. Directamente de la Ley General para prevenir, sancionar, y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, se desprende la presente cita, versando:

Artículo 3o. La interpretación, aplicación y definición de las acciones para el cumplimiento de la presente Ley; el diseño e implementación de acciones de prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos objeto del presente ordenamiento legal, así como para la protección y asistencia a las víctimas, ofendidos y testigos, se orientarán, además de lo previsto en el orden jurídico nacional, por los siguientes principios:

I. Máxima protección: Obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la dignidad, libertad, seguridad y demás derechos humanos de las víctimas y los ofendidos de los delitos previstos por esta ley. Las autoridades adoptarán, en todo momento, medidas para garantizar su seguridad, protección, bienestar físico y psicológico, su intimidad y el resguardo de su identidad y datos personales.

(...) III. Prohibición de la esclavitud y de la discriminación, en los términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 10.- Toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación se le impondrá de 5 a 15 años de prisión y de un mil

a veinte mil días multa, sin perjuicio de las sanciones que correspondan para cada uno de los delitos cometidos, previstos y sancionados en esta Ley y en los códigos penales correspondientes.

Se entenderá por explotación de una persona a:

I. La esclavitud, de conformidad con el artículo 11 de la presente Ley;

Artículo 11. A quien tenga o mantenga a otra persona en una situación de esclavitud, será sancionado con pena de 15 a 30 años prisión y de un mil a 20 mil días multa.

Se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, dejándola sin capacidad de disponer libremente de su propia persona ni de sus bienes y se ejerciten sobre ella, de hecho, atributos del derecho de propiedad.

Resumen y palabras clave: a) Obligación de cualquier autoridad, de velar por la aplicación más amplia de medidas de protección a la libertad, b) además de lo previsto en el orden jurídico nacional, d) prohibición de la esclavitud, e) Se entenderá por explotación de una persona a: I. La esclavitud, f) se entiende por esclavitud el dominio de una persona sobre otra, g) dejándola sin capacidad de disponer libremente de sus bienes.

Trigésima novena referencia. Artículo primero, párrafo cuarto de la Constitución Política Mexicana:

Artículo 1o. (...) párrafo tercero: Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Cuadragésima referencia. De la obra colombiana titulada “¿El Neopunitivismo, camino a la esclavitud?” se desprende la referencia que a continuación se detalla:

La actual situación del sistema punitivo está determinada por la noción de neopunitivismo, caracterizado por la expansión del poder punitivo a todos los rincones de la vida social, y que constituye un nuevo derecho penal, contrailustrado, con marcada deshumanización y con un recrudescimiento sancionador creciente.

Esta situación corresponde al acrecentamiento desmesurado e incontenible del número de las conductas calificadas de delictivas por la ley (fenómeno denominado corrientemente como “inflación de las leyes”, “inflación penal”, “expansión penal”, “conformación paquidérmica” de las incriminaciones punitivas o hipertrofia del derecho penal) que se funda en la consideración simbólica del derecho penal como remedio exclusivo para todos los males sociales (panpenalismo). (Morales, 2012:181).

De los estudios anteriormente expuestos de la tendencia global del uso intensivo del castigo para mantener el neoliberalismo que es especialmente evidente en Estados Unidos, que a su vez ejerce una gran influencia en los campos político, económico y del control penal colombianos, se puede extraer distintos elementos de análisis. (Morales, 2012:197).

El campo del control del crimen, con sus técnicas de incapacitación, castigo y vigilancia altamente represivas, se conviene en una herramienta fundamental para que el Estado controle los conflictos sociales que surgen y se radicalizan como resultado de la marginalización de importantes grupos de la población, que no cuentan para el mercado laboral ni gozan de

la protección de una red de seguridad social. Así, una característica común de los Estados que han abrazado el modelo neoliberal es el fortalecimiento de su aparato represivo, en medio de altas tasas de violencia y criminalidad, para neutralizar el disenso y proteger los intereses de las élites.

Ante el fenómeno mundial del neopunitivismo, nuestro país no es ajeno, pues desde hace varios años hemos visto una proclamada preocupación por la eficiencia en la guerra contra el crimen, así como esa nueva figura del ciudadano víctima del crimen que merece protección, el discurso revaloriza la represión y estigmatiza a los jóvenes de los barrios de la declinante clase trabajadora, desempleados, sin techo, mendigos, drogadictos y prostitutas callejeras, designados como los vectores naturales de una pandemia de delitos menores que envenena la vida cotidiana y son los progenitores de la violencia urbana, que raya en el caos colectivo. (Morales, 2012:199).

Resumen y palabras clave: a) marcada deshumanización, b) recrudecimiento sancionador creciente, c) acrecentamiento desmesurado e incontenible del número de las conductas calificadas de delictivas por la ley, d) “inflación de las leyes”, e) como remedio exclusivo para todos los males sociales, f) tendencia global, g) uso intensivo del castigo para mantener el neoliberalismo, h) especialmente evidente en Estados Unidos, i) altamente represivas, j) fortalecimiento de su aparato represivo, k) en medio de altas tasas de violencia y criminalidad, para neutralizar el disenso y proteger los intereses de las élites, l) fenómeno mundial del neopunitivismo.

Cuadragésima primer referencia. En la revista científica Redalyc fue publicado un documento con autoría de Elena

Azaola y Miguel Ángel Ruiz Torres, desprendiéndose el siguiente extracto:

Bien, pues no obstante que numerosos países han optado por una política criminal que hace de la pena privativa de la libertad el instrumento principal en el que finca sus expectativas de reducir la tasa de la criminalidad, diversos estudios han mostrado que dicha política, que durante la última década ha significado el encarcelamiento en masa en contra de los excluidos, no ha producido los resultados prometidos.

Así, por ejemplo, un estudio efectuado por M. Green sobre la realidad brasileña, ha aplicado modelos matemáticos para estimar los efectos del encarcelamiento, y ha mostrado de manera convincente que los niveles de criminalidad son prácticamente insensibles al tamaño de la población carcelaria.

También algunas estimaciones efectuadas por el Home Office para el caso del Reino Unido, señalan que apenas existe un 1% de reducción de las tasas de criminalidad por cada aumento del 15% en la población carcelaria. Las evidencias en favor de esta conclusión son innumerables. Holanda y Francia, por ejemplo, tuvieron 12% de aumento en las tasas de la criminalidad durante la década de los noventa, siendo que Holanda encarceló en el mismo periodo a 20 veces más delincuentes que Francia. (Azaola y Ruiz, 2015:5)

Hoy en día es un lugar común escuchar que nuestras policías libran una ‘guerra sin cuartel’ contra los delincuentes. Ello equivale a decir, contra toda la ciudadanía con potencial de ser ‘criminalizada’, es decir, la mayoría. Así, al menos, lo propone Paul Chevigny en un estudio llevado a cabo en Brasil (...). (Azaola y Ruiz, 2015:6)

(...) con la actual aplicación de la legalidad y su despliegue institucional, el Estado obstaculiza la satisfacción de necesidades fundamentales de la ciudadanía. La existencia del sistema jurídico-legal en su realidad práctica es un desatino y un contrasentido según la función formal que debe cumplir. (Azaola y Ruiz, 2015:7)

Así, en México ocurre que la Procuraduría ha sido sometida por la autoridad administrativa a un esquema de trabajo basado en “criterios eficientistas”, con el objetivo de “ofrecer resultados a la población, expresados en el incremento de detenidos”. La ideología que mueve esta política es la que algunos autores llaman “neopunitivismo” que se apoya retóricamente en los reclamos de los ciudadanos por una mayor seguridad, y que contiene la peligrosa tendencia a delegar en el sistema penal el control de la criminalidad, no obstante que no es éste su cometido, y el reconocimiento de los derechos fundamentales, creando una sociedad de la vigilancia mutua y elevando lo penal a un “rango absoluto” y obligatorio. (Azaola y Ruiz, 2015:7)

Abuso de poder: la falsa disyuntiva entre eficiencia y legalidad. El dilema entre el derecho y el orden es un conflicto que está en el centro de todo debate sobre la democratización. En realidad, se trata de una falsa disyuntiva, ya que no puede existir un Estado de Derecho real sin respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos. (Azaola y Ruiz, 2015:10)

Existe una tendencia actual en el Estado social de Derecho -principalmente en Europa, aunque también en países como México- que consiste en la proliferación normativa, en el sentido de una hipertrofia del derecho penal, que implica un “acrecentamiento desmesurado del número de conductas calificadas como delictivas por la ley”, y se funda en la

“consideración simbólica del derecho penal como remedio exclusivo para todos los males sociales”. Como puede imaginarse, tal inflación legal socava los principios del derecho penal mínimo, especialmente el principio de subsidiariedad, y tiene consecuencias imprevistas en la procuración de justicia. (Azaola y Ruiz, 2015:10)

Resumen y palabras clave: a) numerosos países han optado por una política criminal, b) hace de la pena privativa de la libertad el instrumento principal en el que finca sus expectativas de reducir la tasa de la criminalidad, c) no ha producido los resultados prometidos, d) con la actual aplicación de la legalidad y su despliegue institucional, el Estado obstaculiza la satisfacción de necesidades fundamentales de la ciudadanía, e) La existencia del sistema jurídico-legal en su realidad práctica es un desatino y un contrasentido según la función formal que debe cumplir, f) abuso de poder: la falsa disyuntiva entre eficiencia y legalidad, g) acrecentamiento desmesurado del número de conductas calificadas como delictivas por la ley, h) tal inflación legal socava [debilitan] los principios del derecho penal mínimo.

Cuadragésima segunda referencia. El Instituto Colombiano de Antropología e Historia, mediante su autor María Teresa Aedo Fuentes, publicó la obra denominada La ambivalencia del discurso inquisitorial: el proceso a Francisco Maldonado de Silva (Chile, siglo XVII), de la cual fueron extraídas las partes que a continuación se señalan:

La Inquisición construye su autoridad mediante el discurso, articulando ciertas formas de diferencia cultural y racial. El ejercicio de su autoridad requiere la producción de diferenciaciones en el interior de la sociedad, a las que se tratará de reducir por medio de una serie de prácticas de vigilancia y apropiación. Su autoridad, sin embargo, depende de la presencia

y de la repetición constante de esas diferencias. De tal modo, la principal estrategia del discurso del poder inquisitorial es la ambivalencia en la afirmación-negación de la diferencia que la funda. Esta escisión productiva en el ejercicio de su poder constituye, a su vez, una amenaza para su autoridad, que se pretende otorgada por Dios, y, por tanto, categórica y universal. (Aedo, 2011:137)

En el caso de las Indias, esta perversión y desviación podían llegar a afectar a la población indígena, de manera que también se trata de impedir “que los naturales de ellas sean pervertidos con nuevas, falsas y reprobadas doctrinas y errores”³. El Tribunal del Santo Oficio aplicará en estas tierras “el verdadero remedio [que] consiste en desviar y excluir del todo la comunicación de los herejes y sospechosos, castigando y extirpando sus errores”. En virtud de este principio de exclusión, procederá “con rigor y castigo contra los que se apartan de ella”; esto es, de la predicación y la doctrina de la santa Iglesia Católica (Medina, Historia del Tribunal del Santo Oficio, “Cédula al obispo de La Concepción”, 102-103). (Aedo, 2011:138)

La Inquisición española se creó en 1480 con el objetivo de combatir la herejía y fortalecer la identidad religiosa, social y política de España, de modo que, más allá del objetivo religioso, constituyó al mismo tiempo un importante instrumento político y de control social (Bennassar). Ambos objetivos, el religioso y el político, se unieron también en el caso de la Inquisición americana (Ramos). El Tribunal de la Inquisición fue creado en México y Perú en 1569 por la Real Cédula de Felipe II, y no solo a petición de diversos funcionarios eclesiásticos y civiles que aducían razones de crisis religiosa y moral, sino, también, por una necesidad de la Corona de controlar la hostilidad política y la penetración ideológica derivadas de la agudización

del conflicto religioso en Europa. Particularmente en el caso de Perú, el Santo Oficio se estableció como uno de los mecanismos adecuados para fortalecer la autoridad del Estado frente a la situación de inestabilidad política existente durante la década de 1560 (Guibovich 34). (Aedo, 2011:138).

Resumen y palabras clave: a) El ejercicio de su autoridad requiere la producción de diferenciaciones en el interior de la sociedad, a las que se tratará de reducir por medio de una serie de prácticas de vigilancia y apropiación, b) la principal estrategia del discurso del poder inquisitorial es la ambivalencia en la afirmación-negación, c) constituye, a su vez, una amenaza para su autoridad, que se pretende otorgada por Dios, d) el verdadero remedio [que] consiste en desviar y excluir del todo la comunicación de los herejes y sospechosos, castigando y extirpando sus errores, e) procederá con rigor y castigo contra los que se apartan de ella, f) La Inquisición española se creó en 1480 con el objetivo de combatir la herejía, g) más allá del objetivo religioso, constituyó al mismo tiempo un importante instrumento político y de control social. h) para fortalecer la autoridad del Estado frente a la situación de inestabilidad política.

CAPITULO IV

ANÁLISIS DE AGRAVIOS Y EVIDENCIAS

1. Discusión

Durante esta etapa de discusión se efectuarán interpretaciones de algunos resultados mostrados durante el desarrollo del documento, además de vincularlos con los

objetivos, hipótesis y preguntas centrales de estudio, asimismo, también se entrelazarán los resultados con la finalidad de proporcionar un adecuado y más claro sentido para, posteriormente, en el segmento siguiente, terminar con la conclusión.

1.1 Estado

En primera instancia, para determinar la definición teleológica se partió de la obtención de las siguientes frases clave, tomadas de la sección de resultados en la sección de “Estado” y que son:

1. El Estado es una creación humana establecida en la Constitución.³
2. Tiene por objeto la obtención de un fin.⁴
3. Los hombres que componen el Estado, los gobernantes y los gobernados, al agruparse formando la sociedad estatal.⁵
4. Identificar al Estado con sus elementos constitutivos (pueblo, territorio, poder).⁶
- 5.- Para solventar el problema de la complejidad social.⁷
- 6.- Agente en las relaciones internacionales.⁸
- 7ñ.- Concordancia de sus actos con las leyes.⁹
- 8.- Los hombres ceden a la comunidad, quien fuera la depositaria de la soberanía, sus derechos que serían devueltos mediante protección.¹⁰

³ (Galindo, 2000:89)

⁴ (Porrúa, 1999:198).

⁵ (Porrúa, 1999:198).

⁶ (Juárez, 2012:25)

⁷ (Guerrero y Vacaro, n.d., Pág 1)

⁸ (Villegas, 2004:5)

⁹ (Porrúa, 1999:48-88)

¹⁰ (Villegas, 2004:35)

9.- Quedando tanto los gobernantes como los gobernados dentro del marco de la ley.¹¹

10.- Constitución política mexicana. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.¹²

Siendo entonces una definición armónica teleológica: El Estado es una creación humana nacida con el objetivo de solventar el problema de la complejidad social, para tener representatividad ante otros Estados y en general para procurar el bien común de sus integrantes, y que, está integrado por pueblo, territorio y poder, que se encuentran regulados bajo normatividades por ellos mismos creados en donde la mayor soberanía recae en el pueblo.

1.2 Administración Pública

De igual manera, la definición de administración pública será determinada por medio de un concatenamiento sistémico de los datos y referencias mostradas en la sección de resultados a través de la extracción de palabras claves de todo ellos, como sigue:

1.- Que se refiere al órgano o conjunto de órganos estatales que desarrollan la función administrativa.¹³

2.- Para obtener el resultado más favorable por el esfuerzo conjunto realizado.¹⁴

¹¹ (Villegas, 2004:35)

¹² Art 39. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

¹³ (Gamboa y Gutiérrez, 2007:62)

¹⁴ (Galindo, 2000:6)

3.- La acción de las autoridades a quienes se encargue el manejo de los intereses y negocios sociales que tengan el carácter de públicos.¹⁵

4.- La actividad que ejecuta el proyecto político.¹⁶

5.- Es una ciencia social.¹⁷

Basado en las anteriores referencias, se define como administración pública a la ciencia encargada de realizar el manejo de los intereses sociales, que tengan el carácter de públicos, a través de un conjunto de órganos estatales a fin de poder ejecutar el proyecto político que conlleve a un beneficio social.

1.3 Principio de legalidad

Un principio general de derecho señala que el actuar del Estado debe estar sustentado en las leyes, éste es el principio de legalidad, el cuál es respaldado con los datos obtenidos de la sección de resultados de las referencias siguientes:

1.- El régimen jurídico es determinado por las propias leyes (contenido en la primera referencia de la sección de resultados).

2.- No se puede exigir lo que no se tenga su fundamento en la norma jurídica (Segunda referencia).

3.- Las actividades del Estado tienden a desarrollarse de acuerdo con el contenido propio de las funciones atribuidas a sus órganos. (Cuarta referencia).

4.- Que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión de actos que pudieran afectar. (Quinta referencia).

5.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, de la Ciudad de México y del

¹⁵ (Guerrero, 2000:65)

¹⁶ (Galindo, 2000:XIII).

¹⁷ (Galindo, 2000:6)

Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. (Décimo Primera Referencia).

6.- La información contenida en la presente conversación no crea obligaciones ni derechos distintos de los establecidos en las disposiciones fiscales. (Décimo cuarta referencia).

7.- Que funde y motive la causa legal. (Trigésima referencia).

8.- Se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. (Trigésima referencia).

9.- Queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley. (Trigésima referencia).

10.- En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho. (Trigésima referencia).

Compilando las frases previas tenemos que, el actuar de cualquier sujeto, llámese Estado, gobernado, gobernante, ciudadano o cualquiera que sea el nombre que se le designe, debe estar sujeto a los que las leyes dispongan, por ende, a su vez, las leyes y demás normatividades deben de ser coincidentes entre ellas, respetando sus propias jerarquías. Todo esto sin olvidar que las personas son quienes crean las leyes basados en una intención original de beneficio mutuo y común, situación que trata de ser representada precisamente en los principios generales de derecho, dejando claro que el objetivo de toda ley está basado en el beneficio de las personas, y así, con ese espíritu, es como las leyes deben nacer y ser ejecutadas.

1.4 Incertidumbre

1.- Exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión de actos que pudieran afectar la esfera jurídica de los individuos, para que esto no caigan en la indefensión o la incertidumbre jurídica. (Quinta referencia).

2.- Conocimiento seguro y claro de algo. (Sexta referencia)

3.- Sin temor de errar. (Sexta referencia)

4.- Limita indebidamente la defensa de su derecho. (Sexta referencia).

5.- Regulaciones demasiado rigurosas. (Séptima referencia)

6.- Instituciones jurídicas débiles. (Séptima referencia)

7.- Informalidad arraigada (Séptima referencia).

8.- Corrupción (Séptima referencia).

9.- Cumplimiento de requisitos cuya observancia sea jurídicamente necesaria, para que un acto de autoridad produzca válidamente la afectación particular. (Octava referencia).

10.- El derecho a la información será garantizado por el Estado, toda persona tiene derecho al libre acceso a información oportuna, por cualquier medio de expresión, de cualquier índole. (Novena referencia).

11.- Proporcionar la información necesaria. (Décima referencia).

12.- Dar a alguien información o consejo, dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado. (Décimo segunda).

13.- Al tercer trimestre de 2016, el 90 por ciento de las quejas se resolvieron favorablemente, desde que se inauguró la dependencia, en julio de 2013. De estas, el 95 por ciento se resolvió a favor del contribuyente, es decir, casi la totalidad. (Vigésima primera).

Visto esto, y para el caso que atañe, la certidumbre consiste en tener conocimiento de algo, y dicho conocimiento debe tener dos características: que sea seguro y que esté claro,

tan claro y tan seguro que no haya temor a errar. Lo anterior, homologado al ámbito jurídico tributario, equivale a que el sujeto pasivo de la relación esté seguro que la forma y monto de contribuciones que está liquidando es la correcta, es decir, también equivale a que el Estado esté seguro que las disposiciones que establece y las formas en que las redacta sean totalmente claras, sin lugar a ningún tipo de duda, que permita al sujeto pasivo liquidar la obligación sin tener margen de error, y si aquel lo tuviere actuando de buena fe, entonces indicará que no se encontraba cierto, que no tenía certeza, que existió la incertidumbre.

1.5 Informalidad y la falta de pago del tributo

1.- Sin embargo, otros sectores se han rezagado, al verse afectados por regulaciones locales demasiado rigurosas, instituciones jurídicas débiles, informalidad arraigada, corrupción y desarrollo financiero insuficiente. (Séptima referencia).

2.- en México las deducciones para los asalariados son casi nulas. (Décimo octava referencia).

3.- La complejidad de las normas tributarias. (Vigésimo segunda referencia).

4.- La excesiva y compleja regulación dificulta la determinación y entero de las contribuciones, implicando altos costos y constituyéndose en un factor de desaliento en el cumplimiento. (Vigésimo tercera).

5.- En una encuesta realizada por el SAT a 1,600 ciudadanos acerca de las causas por las que en México las personas no pagan impuestos, se obtuvo que los motivos son: i) porque es muy difícil, ii) por que no pasa nada si no se paga, iii) porque si se paga, el Gobierno se lo roba o no lo usa correctamente, y iv) porque no existe una cultura de contribuir. (Vigésimo cuarta referencia).

6.- Existen miles de normatividades en México. (Vigésimo octava referencia).

7.- Sometido rigurosa o fuertemente a un deber, etc., muy severo, extremado, exagerado, excesivo. (Vigésimo novena referencia).

Interpretando las coincidencias en el tema, queda de manifiesto que el bienestar de los ciudadanos depende del gasto público que el Estado ejecute durante su administración, éste a su vez depende de la contribución que se logre. La poca claridad para pagar tributo fomenta la informalidad y los litigios, mermando la recaudación. He aquí la importancia de mantener reglas claras y de fácil entendimiento; a mayor claridad, menor informalidad y mayor recaudación.

Queda clara la recomendación que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) hizo a México para atacar la informalidad y obtener mayor recaudación, además de señalar que otros sectores se han rezagado, al verse afectados por regulaciones locales demasiado rigurosas.

1.6 Obligación de informar

1.- El derecho a la información será garantizado por el Estado. (Novena referencia).

2.- Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. (Novena referencia).

3.- El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de (...) de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. (Décima referencia).

4.- Dar a alguien información o consejo, dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado. (Décimo segunda referencia).

5.- De acuerdo a las políticas de uso del Chat uno a uno en la conversación de Chat no se realiza cálculo de impuestos ni llenado de formatos. (Vigésima referencia).

6.- El contribuyente debe contar con la debida seguridad y certeza jurídicas para establecer con el menor margen de duda la forma y términos en que debe tributar. (Vigésima quinta).

7.- Son derechos generales de los contribuyentes los siguientes: I. Derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, así como del contenido y alcance de las mismas. (Vigésimo sexta referencia).

8.- Las autoridades fiscales deberán prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos y obligaciones en materia fiscal. (Vigésimo sexta referencia).

9.- Las autoridades fiscales deberán publicar los textos actualizados de las normas tributarias en sus páginas de Internet, así como contestar en forma oportuna las consultas tributarias. (Vigésimo sexta referencia).

10.- Las autoridades fiscales tendrán la obligación de publicar periódicamente instructivos de tiraje masivo y comprensión accesible, donde se den a conocer a los contribuyentes, de manera clara y explicativa, las diversas formas de pago de las contribuciones. (Vigésimo sexta referencia).

1.7 Imposibilidad práctica

A lo largo de la elaboración se recabaron datos y referencias, los cuales de manera reiterativa indicaban también como área de oportunidad la necesidad de simplificar, además de mantener más claros los procesos y la normatividad; los

mencionados fundamentos son resumidos de la siguiente manera:

1.- Existencia de leyes cuyo nombre no es común escucharlo. (Vigésima octava referencia).

2.- Existen miles de leyes y normatividades en general en México. (Vigésima octava referencia).

3.- Regulaciones demasiado rigurosas, instituciones jurídicas débiles, informalidad arraigada, corrupción. (Séptima referencia).

4.- Discrepancia entre opiniones del SAT: cinco años vs diez, la información contenida en la presente conversación no crea obligaciones ni derechos distintos de los establecidos en las disposiciones fiscales. (Décimo cuarta referencia).

5.- Discrepancia entre opiniones del SAT: Transporte de personal, ser o no herramienta de trabajo. (Décimo quinta referencia).

6.- Garantía fiscal, obligación a cargo de los contribuyentes, para asegurar el cumplimiento de alguna obligación, el fisco se encuentre protegido. (Décimo sexta referencia).

7.- Garantía fiscal: Además de las contribuciones, actualizadas, accesorios, así como de los que se causen en los doce meses siguientes, recargos, en ningún caso las autoridades fiscales podrán dispensar el otorgamiento de la garantía. (Décimo séptima referencia).

8.- Prodecon representa y defiende, a quienes no excedan de 30 veces el salario mínimo. (Décimo novena referencia).

9.- De acuerdo a las políticas de uso del Chat uno a uno en la conversación de Chat no se realiza cálculo de impuestos ni llenado de formatos. (Vigésima referencia).

10.- Al tercer trimestre de 2016, el 90 por ciento de las quejas se resolvieron favorablemente, desde que se inauguró la dependencia, en julio de 2013. De estas, el 95 por ciento se

resolvió a favor del contribuyente, es decir, casi la totalidad. (Vigésima primera referencia).

11.- a) la complejidad de las normas tributarias, b) origina interpretaciones divergentes, c) generando numerosas controversias, d) propiciando la inseguridad jurídica de los contribuyentes, e) la consulta es la única vía que se prevé para que el causante conozca el criterio de la autoridad respecto de un asunto real y concreto y con ello pueda evitar futuras controversias, f) disminuyó considerablemente la presentación de consultas, g) representa lo anterior un grave retraso en la relación jurídico tributaria, h) gravoso que esto resulta debido a los altos costos tanto para los contribuyentes como para la autoridad, i) largo tiempo que normalmente dura la controversia, j) la inseguridad e incertidumbre jurídicas que ello conlleva. (Vigésimo segunda referencia).

12.- a) excesiva y compleja regulación dificulta la determinación y entero de las contribuciones, b) es un factor de desaliento en el cumplimiento, c) México es una compleja carga administrativa, d) México se encuentra en el lugar 107 de 183 países en cuanto a facilidad de pago de impuestos. (Vigésimo tercera referencia).

13.- En una encuesta realizada por el SAT a 1,600 ciudadanos acerca de las causas por las que en México las personas no pagan impuestos, se obtuvo que los motivos son: i) porque es muy difícil, ii) por que no pasa nada si no se paga, iii) porque si se paga, el Gobierno se lo roba o no lo usa correctamente, y iv) porque no existe una cultura de contribuir. (Vigésimo cuarta referencia).

14.- a) Palabras clave de esclavitud (vo): Sometido rigurosa o fuertemente a un deber, etc, b) muy severo, c) extremado, d) exagerado, e) excesivo. (Vigésimo novena referencia).

15. Los casos atendidos por Prodecon incrementaron 22 veces al pasar de 7,753 casos totales anuales en 2012 hasta un

proyectado de 172,097 en 2017. (Trigésimo segunda referencia).

En este segmento en particular, los datos y resultados se reforzaron con opiniones internacionales, incluso, dando un contexto más amplio y sólido.

Los temas más repetitivos fueron: la dificultad y poco entendimiento de la norma jurídica, la desincentivación al cumplimiento, riguroso sistema, gran número de leyes y normatividades, altos costos en litigios, el incremento de las quejas, asesorías y casos en general, resaltando que en el 95% de los casos resueltos la autoridad no supo interpretar la ley, y, por ende, estuvo equivocada.

1.8 Soberanía del pueblo

1.- Habrá siempre una gran diferencia entre someter una multitud y regir una sociedad. Que hombres dispersos estén sucesivamente sojuzgados a uno solo, cualquiera que sea el número, yo sólo veo en esa colectividad un señor y esclavos, jamás un pueblo y su jefe: representarán, si se quiere, una agrupación, mas no una asociación, porque no hay ni bien público ni cuerpo político. Ese hombre, aun cuando haya sojuzgado a medio mundo, no es siempre más que un particular; su interés, separado del de los demás, será siempre un interés privado. Si llega a perecer, su imperio, tras él, se dispersará y permanecerá sin unión ni adherencia, como un roble se destruye y cae convertido en un montón de cenizas después que el fuego lo ha consumido. (Tercera referencia).

2.- a) promover la satisfacción de necesidades de los ciudadanos, b) fomentar el bienestar y el progreso de la colectividad. (Cuarta referencia).

3.- Los gobernados, que pueden oponerse a los órganos estatales para exigirles que se sujeten a un conjunto de requisitos previos a la emisión de actos. (Quinta referencia)

4.- Artículo 39. Constitución política mexicana. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. (Décimo tercera referencia).

5.- Artículo 40. Constitución política mexicana. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal. (Décimo tercera referencia).

6.- El contribuyente debe contar con la debida seguridad y certeza jurídicas para establecer con el menor margen de duda la forma y términos en que debe tributar. (Vigésima quinta).

7.- Las autoridades fiscales deberán prestar a los contribuyentes la necesaria asistencia e información acerca de sus derechos y obligaciones en materia fiscal. (Vigésimo sexta referencia).

8.- El Estado no está por encima de la Nación, aunque exista el reconocimiento que fue primero aquel que ella. e) El Estado está el servicio de la nación y no a la inversa y la nación la comprendemos y le damos vida todos los ciudadanos. (Trigésima primera referencia).

Es claramente observable que la mayoría de los datos recopilados indican que la soberanía recae en el pueblo, que es quien tiene el máximo poder, pero, es preciso recalcar que, dentro de todos ellos, está incluido el artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, jerárquicamente reafirmando el peso que eso significa.

1.9 Criterios de los tribunales

1.- Con las palabras clave obtenidas, y un análisis a contrario sensu de la presente tesis, es posible determinar una definición de “estado de indefensión e incertidumbre jurídica”, siendo como sigue: es la falta de pleno conocimiento de la normatividad, así como de sus consecuencias, por no ser lo suficientemente claras, ocasionando ambigüedades, de tal forma que el gobernado no tiene certeza de los elementos esenciales de la contribución ni de sus remedios jurídicos en caso de incumplirse. (Trigésima tercera referencia).

2.- La seguridad jurídica es inversamente proporcional a los excesos y arbitrariedades de la autoridad.

La confianza legítima es consecuencia de la existencia de seguridad jurídica.

El derecho a la seguridad jurídica está fundamentado en los artículos 14 y 16 constitucionales, es decir, que es superior a las demás leyes tributarias. (Principio de jerarquía normativa).

Los artículos 14 y 16 constitucionales tutelan la prerrogativa del gobernado a no encontrarse jamás en una situación de incertidumbre jurídica y, en consecuencia, en un estado de indefensión.

La seguridad jurídica (principio de legalidad), la superioridad constitucional sobre las demás leyes tributarias (principio de jerarquía normativa), la confianza legítima, la certidumbre jurídica y el estado de defensa, todos ellos, convergen en su esencia, la cual versa sobre la premisa consistente en "saber a qué atenerse". (Trigésima tercera referencia).

3.- La presente tesis muestra algunas frases idénticas a otras de las previamente analizadas, reforzando así la importancia de la certidumbre jurídica y el estado de defensa que deben prevalecer en el país. No obstante, existen algunos comentarios adicionales y complementarios sobre los cuales versará el análisis, de los cuales se puede resumir que, dentro del papel que se concede a la ley se encuentran:

- ✓ Que es un instrumento garantizador de un trato igual,
- ✓ Es un vehículo generador de certeza, y
- ✓ Sirve como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado.

Otro punto importante a señalar es que, la presente tesis es de 2012, sin embargo, sigue siendo coincidente con las emitidas en 2017, lo que indica que la esencia del estado de defensa y certidumbre jurídica, sigue siendo la misma a través de los años, aún a través de las reformas que han sufrido las leyes, resaltando, incluso, la vigente a partir de 2014. Dicho en otras palabras, el espíritu, la intención y el fondo de la norma sigue prevaleciendo sobre la forma. (Trigésima quinta referencia).

4.- El tema medular de la tesis radica en tres circunstancias:

a) El legislador es el encargado de establecer el hecho infractor y su respectiva infracción, y si él no los establecido en la ley, entonces quien señala el mencionado hecho infractor y su infracción es una persona distinta, lo cual es inconstitucional, puesto que esa otra persona no está facultada para ello.

b) Si el hecho infractor y su respectiva infracción no están establecido en la ley, entonces el gobernado no sabe a qué atenerse, también inconstitucional. La doctrina lo llama “Ley hueca”.

c) El contenido de las leyes sigue un proceso constitucional de autorización antes de entrar en vigor. Si en la

Ley se omitió algo, eso no puede ser añadido sin seguir el mismo proceso. Si hubo una omisión que requiere subsanarse, debe realizarse a través de una reforma fiscal que siga el proceso formal.

Lo anterior genera estado de indefensión e incertidumbre jurídica. (Trigésima sexta referencia).

5.- En esencia, similar a las tesis anteriores en lo referente a incertidumbre jurídica y estado de indefensión, sin embargo, a diferencia de los otros temas, éste se refiere a los sistemas de agua potable, luego entonces, una primera conclusión radica en que, a pesar que son temas y niveles de gobierno diferentes, la esencia y el espíritu de la norma es el mismo, sin importar el nivel o ejemplo donde se aplique; el origen es constitucional, y por jerarquía normativa se extiende a todas las demás normas de menor nivel.

Complementariamente, además de lo que ya resulta repetitivo y similar con otras tesis, se comentan detalles sobre el caso en particular:

La ley faculta a los organismos operadores para realizar las acciones necesarias tendientes a impedir, obstruir o cerrar la posibilidad de descargar aguas a aquellos usuarios que incumplan con el pago, sin embargo:

- ✓ No precisa el número de pagos mínimos que los usuarios del citado servicio deben incumplir para que se les aplique dicha sanción
- ✓ Deja a la voluntad de los organismos operadores el determinar el monto de la sanción.
- ✓ No precisa el caso concreto sobre el cuál aplicará la penalización.
- ✓ No precisa la reincidencia.

✓ No precisa la gravedad.

Como ha sido señalado también en las tesis previas, el gobernado no “sabe a qué atenerse” por no estar las reglas completas ni legalmente establecidas, es decir, se encuentra en estado de indefensión e incertidumbre jurídica. (Trigésima séptima referencia).

1.10 Neopunitivismo y exceso de regulaciones

Atendiendo a la definición de neopunitivismo vertida en la cuadragésima referencia y que es caracterizada por la expansión del poder punitivo a todos los rincones de la vida social, y que constituye un nuevo derecho penal, contrailustrado, con marcada deshumanización y con un recrudecimiento sancionador creciente, en otras palabras, entendiéndose como el incremento desmedido de las reglamentaciones, además del análisis armónico con otras referencias, se desprende el siguiente resumen:

1.- a) marcada deshumanización, b) recrudecimiento sancionador creciente, c) acrecentamiento desmesurado e incontenible del número de las conductas calificadas de delictivas por la ley, d) “inflación de las leyes”, e) como remedio exclusivo para todos los males sociales, f) tendencia global, g) uso intensivo del castigo para mantener el neoliberalismo, h) especialmente evidente en Estados Unidos, i) altamente represivas, j) fortalecimiento de su aparato represivo, k) en medio de altas tasas de violencia y criminalidad, para neutralizar el disenso y proteger los intereses de las élites, l) fenómeno mundial del neopunitivismo.(Cuadragésima referencia).

2.- : a) numerosos países han optado por una política criminal, b) hace de la pena privativa de la libertad el instrumento principal en el que finca sus expectativas de reducir

la tasa de la criminalidad, c) no ha producido los resultados prometidos, d) con la actual aplicación de la legalidad y su despliegue institucional, el Estado obstaculiza la satisfacción de necesidades fundamentales de la ciudadanía, e) La existencia del sistema jurídico-legal en su realidad práctica es un desatino y un contrasentido según la función formal que debe cumplir, f) abuso de poder: la falsa disyuntiva entre eficiencia y legalidad, g) acrecentamiento desmesurado del número de conductas calificadas como delictivas por la ley, h) tal inflación legal socava [debilitan] los principios del derecho penal mínimo. (Cuadragésima primer referencia)

3.- a) El ejercicio de su autoridad requiere la producción de diferenciaciones en el interior de la sociedad, a las que se tratará de reducir por medio de una serie de prácticas de vigilancia y apropiación, b) la principal estrategia del discurso del poder inquisitorial es la ambivalencia en la afirmación-negación, c) constituye, a su vez, una amenaza para su autoridad, que se pretende otorgada por Dios, d) el verdadero remedio [que] consiste en desviar y excluir del todo la comunicación de los herejes y sospechosos, castigando y extirpando sus errores, e) procederá con rigor y castigo contra los que se apartan de ella, f) La Inquisición española se creó en 1480 con el objetivo de combatir la herejía, g) más allá del objetivo religioso, constituyó al mismo tiempo un importante instrumento político y de control social. h) para fortalecer la autoridad del Estado frente a la situación de inestabilidad política. (Cuadragésima segunda referencia).

4.- Existencia de leyes cuyo nombre no es común escucharlo. (Vigésima octava referencia).

5.- Existen miles de leyes y normatividades en general en México. (Vigésima octava referencia).

6.- Regulaciones demasiado rigurosas, instituciones jurídicas débiles, informalidad arraigada, corrupción. (Séptima referencia).

7.- La seguridad jurídica es inversamente proporcional a los excesos y arbitrariedades de la autoridad.

La confianza legítima es consecuencia de la existencia de seguridad jurídica.

El derecho a la seguridad jurídica está fundamentado en los artículos 14 y 16 constitucionales, es decir, que es superior a las demás leyes tributarias. (Principio de jerarquía normativa).

8.- a) excesiva y compleja regulación dificulta la determinación y entero de las contribuciones, b) es un factor de desaliento en el cumplimiento, c) México es una compleja carga administrativa, d) México se encuentra en el lugar 107 de 183 países en cuanto a facilidad de pago de impuestos. (Vigésimo tercera referencia).

9.- Al tercer trimestre de 2016, el 90 por ciento de las quejas se resolvieron favorablemente, desde que se inauguró la dependencia, en julio de 2013. De estas, el 95 por ciento se resolvió a favor del contribuyente, es decir, casi la totalidad. (Vigésima primera).

Conforme a la información obtenida de las referencias arriba destacadas; evidente y concluyente resulta la afirmación sobre que, en México como en el mundo comienza a proliferar la creación excesiva de leyes, como medida para intentar solucionar los problemas sociales, como ejemplo se puede citar: La Ley de Seguridad Interior, para tratar de frenar la inseguridad; la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, para frenar el lavado de dinero, entre otras.

A lo anterior se adiciona el hecho de que el número de leyes en México es vasto, y más aún, complicado, como también se fundamenta en las citas, sin mencionar, que, además de vasta, las regulaciones resultan complicadas, ocasionando un alto

número de litigio, mayormente ganados por los contribuyentes, confirmando el actuar inadecuado de las autoridades.

Una cita más enfoca la atención hacia la inquisición, señalando que la principal estrategia del discurso del poder inquisitorial es la ambivalencia, y lo compara con la santa inquisición. El hecho de agregar la referencia puede resultar, ante los ojos de algunos, excesivo, absurdo e inoperante, debido a que puede señalar un extremo de la historia, sin embargo, la percepción puede variar entre los que ya han estado en una situación de incertidumbre jurídica o exceso de autoridad resultante en un castigo pecuniario o corporal, a los que no lo han vivido.

CAPÍTULO V

ANÁLISIS FINAL Y CONCLUSIONES DEL AUTOR

“El auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria.”
Winston Churchill, estadista.

Es obligación del Estado garantizar que las personas estén informadas con fundamento en el artículo 6 constitucional al señalar: “El derecho a la información será garantizado por el Estado”.

Traducido al ámbito tributario indica que los sujetos pasivos deben tener certeza y claridad sobre como cumplir con su obligación del pago de la contribución.

Los tribunales se encuentran saturados dirimiendo diferencias de interpretación de las normas tributarias, hecho ineludible de que la información no es clara.

La evidencia mostrada durante el desarrollo del tema, donde la autoridad orientó incorrectamente a través de uno de los medios de comunicación, por ellos mismos diseñado, reafirma que las disposiciones no son claras, ni aún para el propio Estado.

El mismo artículo 6 de la constitución señala que “Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión”. La última frase: “por cualquier medio de expresión”, no limita la forma en la que el contribuyente recibirá la información, entiéndase, formal, informal, verbal, escrito, chat, digital, etcétera. La constitución lo permite, por lo tanto, las normas de menor jerarquía jurídica no deben actuar en contravención. Este comentario es señalado para traer a la atención el hecho que en la actualidad las autoridades no otorgan valor ni importancia suficiente a este tipo de evidencias cuando son presentadas como parte de los medios de defensa, al ignorar o no otorgar la importancia debida a esta herramienta, a contrario sensu, el contribuyente va quedando con menos pruebas, es decir, en más indefensión, además de incertidumbre al no saber si confiar o no en el consejo de la propia autoridad.

El objetivo fundamental de la relación jurídico tributaria es obtener recursos para ejercer el gasto público en favor de la sociedad, si el Estado, -sujeto facultado para la recaudación y aplicación de los recursos-, no enseña de forma clara cómo pagar el tributo, entonces es auto-sabotaje, un acto a todas luces opuesto a la consecución del objetivo principal -recaudar para

ejecutar obras del bien común- y por ende, una rebeldía que conlleva al incumplimiento del mandato constitucional que le fue encomendado.

En el actual documento se proporcionó información suficiente para sustentar el argumento de que en la República Mexicana actualmente se experimenta un desconocimiento de la normatividad tributaria, a tal grado que impide la correcta determinación y entero del tributo, originado tanto por las complicadas y numerosas regulaciones, como por la inadecuada asesoría por parte de las mismas autoridades que representan al Estado en su función de recaudador. Lo anterior originando desaliento en los contribuyentes para con el pago de sus deberes tributarios, además de fomentar la informalidad, lo cual, va en detrimento de la obtención de las metas presupuestarias trazadas, orillando a los organismos encargados de la ejecución del gasto público a elaborar recortes, provocando una desatención de las necesidades de la población, o bien, recurrir a los empréstitos que permitan cubrir con el objetivo fundamental de procurar el bienestar en el territorio nacional.

En cuanto a su función y objetivo teleológico como Estado, retomando la definición armónica que se obtuvo de este estudio y que se muestra en la sección de discusión: El Estado es una creación humana nacida con el objetivo de solventar el problema de la complejidad social, para tener representatividad ante otros Estados y en general para procurar el bien común de sus integrantes, y que, está integrado por pueblo, territorio y poder, que se encuentran regulados bajo normatividades por ellos mismos creados en donde la mayor soberanía recae en el pueblo. Luego entonces, en este sentido, el Estado mexicano no está procurando el bienestar de su población de la manera equitativa y proporcional que señala la carta magna, puesto que, al fomentar la informalidad, la aportación financiera a las arcas

del Estado solo recae en algunos, esto es inequitativo, además, al no lograr las metas presupuestarias no se tendrán fondos suficientes para procurar el bien común de los ciudadanos, además que, debido a lo complicado y burocrático de los procesos y trámites, tampoco se logra la simplicidad social mencionada.

Siguiendo con el objetivo fundamental del Estado, éste radica en algunas necesidades muy puntuales donde destacan el hecho de solventar el problema de la complejidad social, la representatividad del país ante otros Estados y el procurar el bien común del pueblo, es decir, si volvemos a los orígenes por los cuales el Estado fue creado, los objetivos son muy simples, claros y solo pocos, sin embargo, la existencia de miles de leyes y normatividades en nuestro país, indica que la realidad no es congruente con la esencia. En adición, si las disposiciones jurídicas resultan difíciles de interpretar, incluso para las propias autoridades, que solo son encargadas de ejecutar las leyes que a su área en específico les corresponde, más aún será complicado para el gobernado que, además de entender las normas tributarias, debe también dominar las de carácter civil, mercantil, los tratados, las NOM, la constitución y las demás existentes, que ya se documentó, son miles, siendo concluyente que es imposible cumplirlas

El Artículo segundo de la Ley del Servicio de Administración Tributaria señala claramente que “El Servicio de Administración Tributaria tiene la responsabilidad de (...) facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario de dichas disposiciones, y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria.”

Por lo tanto, si el sujeto pasivo (persona obligada al pago del tributo), al no tener claros ni siquiera los elementos más

básicos de la relación jurídica tributaria, como lo son: el sujeto, el objeto, la base y la tasa o cuota, ni tampoco recibe una apropiada orientación por parte del Estado, entonces se encontrará en un claro estado de indefensión e incertidumbre jurídica, y el Estado, por su parte, se encontrará en un incumplimiento del mandato jurídicamente encomendado.

Resulta a todas luces lógico que el Estado se encuentre empoderado y protegido por las normas tributarias, que le permitan ser coercitivo, sin embargo, no deben perderse de vista las intenciones constitucionales de que el sujeto pasivo deba encontrarse informado y claro en la forma de cumplir con sus obligaciones, eso le dará certidumbre, además, recordemos que, la constitución jerárquicamente está por encima del resto de las normas tributarias.

La frase “es injusto pero legal” no debería existir, o acaso, ¿está lo legal por encima de lo justo?

En la relación jurídico tributaria existen dos partes, el sujeto pasivo (contribuyente) y el activo (Estado). El contribuyente está obligado a pagar el tributo, el Estado a diseñar las normas que establezcan las formas de pago. Lo lógico es que, quien hace las leyes las conoce mejor y sea quien las interprete más atinadamente en caso de duda ¿Por qué entonces, en un juicio de defensa, no se toma como interpretación correcta la ya dada por el Estado a través de uno de los canales que él mismo creó para otorgar orientación al contribuyente? Realmente no debería ni siquiera existir del juicio que solo implicará costos para ambas partes y pérdida de tiempo, donde, al final del camino, incluso, puede ser, como en muchos casos sucede, que el Estado no recaude importe alguno, solo hubo costo para ambas partes, y, por lo tanto, no se estará cumpliendo con el objetivo constitucional.

Ahora bien, se vuelve a elaborar la misma pregunta: ¿está lo legal por encima de lo justo? ¿es justo que la interpretación más atinada sea la del Estado y que por ende haga sentido que sea la que se use en caso de duda? ¿Es justo que el contribuyente crea y confíe en lo que el Estado le oriente? Si el Estado es quien tiene el poder en la relación jurídico tributaria, es lógico pensar que el contribuyente debe obedecer y hacer lo que el Estado le oriente, el contribuyente debe considerarlo incluso, no como una sugerencia, sino más bien como un mandato, por el simple hecho de venir de quien tiene el poder y el saber. Si el contribuyente que hace lo que el Estado le ordenó y posteriormente el Estado cambia de opinión y señala que aquello era incorrecto ¿Es justo que se castigue al contribuyente por un error del Estado?

Si no se puede confiar en lo que el mismo Estado indica hacer, eso se llama INCERTIDUMBRE JURÍDICA.

Si no se da validez en un proceso de defensa fiscal a la orientación hecha por el propio Estado, sobre sus propias normas, eso se llama ESTADO DE INDEFENSIÓN.

¿Somos los mexicanos esclavos?

Según Rousseau (1999:13): “Habrá siempre una gran diferencia entre SOMETER una multitud y REGIR una sociedad. Que hombres dispersos estén sucesivamente sojuzgados a uno solo, cualquiera que sea el número, yo sólo veo en esa colectividad un señor y esclavos (...).

Según la Real Academia de la Lengua Española:

Esclavo, va

1. adj. Dicho de una persona: Que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra.

2. adj. Sometido riguroso o fuertemente a un deber, pasión, afecto, vicio, etc., que priva de libertad. Hombre esclavo de su palabra. U. m. c. s.

3. adj. Rendido, obediente, enamorado. U. m. c. s.

4. adj. Dicho de una actividad: Que exige mucho trabajo, atención y cuidado. El deporte de competición es muy esclavo.

Riguroso, sa.

De riguroso.

1. adj. Áspero y acre.

2. adj. Muy severo, cruel.

3. adj. Estrecho, austero, rígido.

Pareciera ser una dura, extremista y hasta absurda comparación, sin embargo, al observar la definición literal, esclavo no es aquel individuo que se sujeta con cadenas y es golpeado con el látigo por el capataz, sino, más bien, es quien cumple con las características “CARECE DE LIBERTAD”, estar “BAJO EL DOMINIO DE OTRO”, ser “SOMETIDO RIGUROSAMENTE A UN DEBER”.

“La nueva información hace posible las nuevas ideas.”

Zig Ziglar, escritor.

Vuelvo a preguntar: ¿Somos los mexicanos esclavos?

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aedo, M. (2011). *“La ambivalencia del discurso inquisitorial: el proceso a Francisco Maldonado de Silva (Chile, siglo XVII)”*. Colombia: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/833/83322609005.pdf>
- Álvarez, G., Ballesteros, M. y Fimbres, A. (2011). *Planeación Fiscal versus Evasión Fiscal*. Revista El Buzón de Pacioli, (74), 1-21. Recuperado de: <http://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/Paginas/pacioli.aspx>
- Azaola, E., Ruiz, M. (2015). *Política criminal y sistema penal en México*. México: Universidad Autónoma del Estado de México. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/html/325/32515302/>
- Carbonell, Miguel (2003). *El federalismo en México: principios generales y distribución de competencias*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM. Recuperado de: <https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-derecho-constitucional/article/view/3595/3355>
- Carles, Ramió (n.d.). *Teoría de la organización y administración pública*. n.d. Recuperado de: <http://www.fcpolit.unr.edu.ar/tecnologiasdelaadministracion/files/2012/08/U1-Carles-Ramio-Teoria-de-la-Organizacion.pdf>
- Cartolín, H. (s.f.). *La Relación Jurídico Tributaria*. Recuperado de: http://campusvirtual.hacienda.go.cr/_Recursos/Global/Recurso0000248/Relaci%C3%B3n%20Ju%C3%ADdico.pdf
- Congreso de la Unión. (2016). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*. México. Recuperado de:

- http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_240217.pdf
- Cuenca, C. (1985). *La Seguridad Jurídica de los Gobernados y las Resoluciones de los Órganos Judiciales en Material Penal*. Recuperado de: <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3188/24.pdf>
- De la Garza, S. F. (2008). *Derecho Financiero Mexicano*. (28ª Edición). México: Porrúa.
- De Pina, R. (1999). *Diccionario de Derecho*. México: Ed. Porrúa.
- Gamboa, Claudia y Gutiérrez, Miriam (2007). *Estudio Teórico-Doctrinal, de Antecedentes Constitucionales, Derecho Comparado, e Iniciativas presentadas que proponen reformar los artículos 90, 91 y 92 Constitucionales, en la LIX y LX Legislatura*. México: Cámara de Diputados.
- Gob.mx. (2017). *Presupuesto de Egresos de la Federación. Ejercicio Fiscal 2017*. Recuperado de: <http://pef.hacienda.gob.mx/>
- Islas, R. (2010). *Estrategia Administrativa de Defensa*. Primera Edición. México: Editorial Diánoia.
- Feregrino, B. (2017). *Diccionario de Términos Fiscales*. (8ª Edición). México: Ediciones Fiscales ISEF SA.
- Guerrero, Antonio y Vacaro, Moisés (n.d.). *El origen del Estado*. España. Recuperado de: <http://laberinto.uma.es>
- Guerrero, Omar (1989). *El Estado y la Administración Pública en México*. México: Instituto Nacional de Administración Pública.
- Guerrero, Omar (2000). *Teoría administrativa del Estado*. México: Oxford.
- Guillén, Tonatiuh (2016). *Federalismo, gobiernos locales y democracia*. México: Instituto Nacional Electoral. Recuperado de:

- <http://portalanterior.ine.mx/archivos2/portal/historico/contenido/recursos/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC-CuadernosdeDivulgacion/docs/17.pdf>
- Gutierrez, M (2002). Estudio comparativo entre el sistema tributario mexicano y el de los Estados Unidos de Norteamérica. México: Universidad Autónoma de Nuevo León. Recuperado de: <http://eprints.uanl.mx/5127/1/1020147074.PDF>
- Huerta, María (2005). *El neoliberalismo y la conformación del Estado subsidiario*. México: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/pdf/267/26702406.pdf>
- Juárez, F. (2012). *Teoría general del Estado*. México: Red Tercer Milenio.
- Menéndez, A. (Comp). (2009). *Derecho Financiero Tributario*. España: Lex Nova
- Morales, I. (2012). ¿El neopunitivismo, camino a la esclavitud? Colombia: Revista LOGOS Ciencia & Tecnología. Recuperado de: <http://www.redalyc.org/html/5177/517751763015/>
- Nájera, A. (2012). *Derecho Tributario*. México: Tecnológico de Estudios Superiores del Oriente del Estado de México.
- Porrúa, F.(1999). *Teoría del Estado*. México: Editorial Porrúa.
- Porrúa, M. (2016). *Derechos del Pueblo Mexicano: México a través de sus constituciones*. México: Porrúa.
- Prodecon (2011). *Panorama de la situación de los contribuyentes en México*. México: Prodecon. Recuperado de: <https://www.prodecon.gob.mx/index.php/home/cc/publicaciones/numero-i>
www.prodecon.gob.mx
- Ramírez, R. (Coord) (2009). *Federalismo*. México: Cámara de Diputados. Recuperado de:

<http://www.cefp.gob.mx/intr/edocumentos/pdf/cefp/2009/cefp0542009.pdf>

Rousseau, J. (1999). *El contrato social o principios de derecho político*. Elaleph.com. Recuperado de: <http://www.enxarxa.com/biblioteca/ROUSSEAU%20El%20Contrato%20Social.pdf>

Serna, J. (2016). *El federalismo en la Constitución*. México: El Universal. Recuperado de: <http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/José-ma-serna-de-la-garza/nacion/2016/06/7/el-federalismo-en-la>

Servicio de Administración Tributaria (2017). www.sat.gob.mx

Silva, B. (Coord) y Juárez, J. (2013). *Manual del modelo de documentación de la Asociación de Psicología Americana (APA) en su sexta edición*. Puebla, México. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.

Universidad América Latina. (2017). *Programa de la Materia de Derecho Fiscal*. Recuperado de: http://ual.dyndns.org/biblioteca/derecho_fiscal/Docs/Inicio.html

Yee, C. (2007). Principio de legalidad; hacia una cultura de respeto al orden jurídico vigente. México. Recuperado de: <http://www.ordenjuridico.gob.mx/Congreso/pdf/65.pdf>

Villegas, A. (2004). La noción y concepto de Estado desde la antigüedad hasta la edad moderna a través de sus pensadores. Chile: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Recuperado de: <http://www.e-historia.cl/>

¿Somos los mexicanos esclavos?

El libro te llevará por un camino de información con la finalidad de que, el lector, por sí mismo, se convenza de ello.

ESCLAVISMO MEXICANO: UN ESTADO DE INDEFENSIÓN E INCERTIDUMBRE JURÍDICA
